

Señor don Gustavo Rivero Unzué.
Pte.

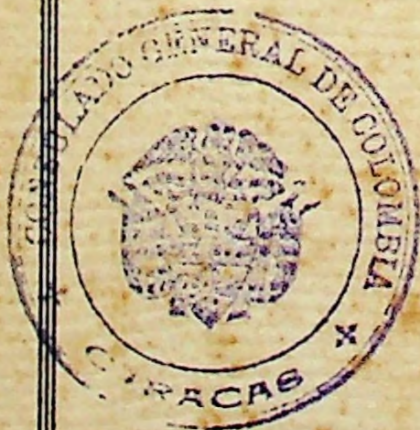
REPUBLICA DE COLOMBIA — MINISTERIO DE INDUSTRIAS

SECCION DE PUBLICACIONES. JEFE, BELISARIO VEJARANO S.

LEY 37 DE 1931

“DEL PETROLEO”

TEXTO OFICIAL — TRADUCCION AL INGLES



IMPRENTA NACIONAL — BOGOTA — 1931

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE INDUSTRIAS

LEY 37 DE 1931

(MARZO 4)

“DEL PETROLEO”



IMPRENTA NACIONAL — BOGOTÁ — 1931

LEY 37 DE 1931

(MARZO 4)

“DEL PETRÓLEO”

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPITULO I

Disposiciones generales.

Artículo 1°. Las disposiciones de esta ley se refieren a las mezclas naturales de hidrocarburos que se encuentran en la tierra, cualquiera que sea el estado físico de aquéllas, y que componen el petróleo crudo, lo acompañan o se derivan de él.

Para los efectos de la presente ley, las mezclas naturales de hidrocarburos a que se refiere el inciso anterior se denominan petróleo.

Artículo 2°. La Nación se reserva el helio y otros gases raros que se encuentren en yacimientos de su propiedad. En consecuencia, podrá explotarlos directamente o por contrato. Si durante la exploración o explotación de una zona concedida se encontraren pozos que contengan cualquiera de los gases reservados por este artículo, podrá el Gobierno tomar dichos pozos pagando al concesionario el costo de su perforación, debidamente comprobado, y un diez por ciento (10 por 100) más. Podrá también el Gobierno establecer por su cuenta, directamente o por contrato, las necesarias instalaciones para beneficiarlos dentro de los terrenos de la concesión en forma que no estorbe las explotaciones del concesionario. Siempre que los beneficie por su cuenta, devolverá al industrial los gases

excedentes, pagándole el valor de los desperdicios ocasionados por la captación del helio o de otros gases raros.

En caso de no llegar a un acuerdo para fijar el costo de la perforación de los pozos tomados por el Gobierno, el asunto se resolverá por peritos nombrados de conformidad con el artículo 9º de esta ley.

Artículo 3º. Declárase de utilidad pública la industria del petróleo en sus ramos de exploración, explotación, refinación, transporte y distribución. Por tanto, podrán decretarse por el Ministerio del ramo, a petición de parte legítimamente interesada, las expropiaciones necesarias para el ejercicio y desarrollo de tal industria.

De los juicios de expropiación a que haya lugar conocerán en primera instancia los Jueces de Circuito de la ubicación del inmueble respectivo, y en segunda instancia los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. El trámite de esos juicios se ajustará a las disposiciones de procedimiento judicial que sean pertinentes, especialmente las que se refieren a expropiaciones para construcción de ferrocarriles.

Artículo 4º. Los derechos de los particulares sobre el petróleo de propiedad privada serán reconocidos y respetados como lo establece la Constitución, y el Estado no intervendrá con respecto a ellos en forma que menoscabe tales derechos.

Artículo 5º. Las personas que se dediquen a la industria del petróleo en sus ramos de exploración, explotación, transporte y distribución, suministrarán los datos que hayan obtenido, de carácter científico, técnico, económico y estadístico, que sean indispensables, a juicio del Gobierno, para hacer el estudio geológico y geofísico del país, llevar la estadística de la industria, y para calcular los impuestos legales y las regalías, cánones o beneficios, que según el caso le correspondan a la Nación. Estos datos podrán ser solicitados exclusivamente para los efectos indicados. El Gobierno guardará la debida reserva sobre aquellos datos que, atendida su naturaleza, la requieran en defensa de los legítimos intereses de dichas personas.

Cuando el Ministerio respectivo lo juzgue necesario, podrá verificar directamente o por medio de sus agentes, la exactitud de los datos a que se refiere el inciso anterior.

Las personas a que se refiere este artículo prestarán a los empleados nacionales encargados de la inspección, vigilancia y fiscalización, todas las facilidades necesarias para el buen desempeño de su cargo.

Artículo 6º. Los colombianos tendrán preferencia para ser ocupados como empleados superiores en todas las dependencias de las empresas de petróleo, en las mismas condiciones y con los mismos sueldos de los empleados extranjeros de igual categoría, siempre que su competencia no sea inferior a la de los extranjeros.

Los obreros colombianos, cuando no sea necesaria competencia técnica, y aun en este caso, si la competencia es la misma, serán preferidos a los extranjeros.

El Gobierno determinará en el decreto reglamentario de la presente ley, o en cada contrato, el porcentaje mínimo de empleados y obreros nacionales que deben ocupar las empresas respectivas.

Las divergencias que se susciten entre el Gobierno y las compañías respecto a la calificación de la competencia de los empleados nacionales u obreros, se dirimirán en la forma establecida en el artículo 9º

Artículo 7º. Las disposiciones de los capítulos XII, XIII y XIV del Código de Minas, sobre "servidumbres establecidas en favor de las minas," "indemnizaciones a que son obligados los mineros" y "aguas para las minas", se aplicarán, a falta de disposiciones especiales, a la industria del petróleo.

Además, en favor de la explotación del petróleo se consagra el derecho de establecer la servidumbre de oleoductos, comprendiendo en ella el terreno suficiente para las estaciones de bombeo, y demás dependencias necesarias para el funcionamiento de los oleoductos, y el de establecer muelles, cargaderos y tuberías submarinas y subfluviales, todo esto previo el cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 37.

Artículo 8°. Tanto por la materia sobre que recaen como por el lugar en que se celebran, estos contratos se rigen por las leyes colombianas y quedan sometidos a la jurisdicción de los Tribunales colombianos. En consecuencia, consultando la mayor autoridad y la mayor prontitud en los juicios, toda discrepancia entre los contratantes acerca de la interpretación de los contratos, y toda diferencia o controversia sobre su ejecución, resolución, rescisión o caducidad, que no sean dirimibles por medio de peritos en los casos previstos en el artículo 9°, serán decididas de modo definitivo por la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena en lo Civil y en una sola instancia.

Las compañías cuyo asiento principal de negocios esté en algún país extranjero, que quieran establecerse en Colombia y celebrar con la Nación o con particulares contratos sobre petróleo, deberán constituir y domiciliar en la cabecera del Circuito de Notaría de Bogotá, aunque no sean colectivas, una casa o sucursal, llenando las formalidades del artículo 470 y de sus concordantes del Código de Comercio, casa que será considerada como colombiana para los efectos nacionales e internacionales, en relación con estos contratos y los bienes, derechos y acciones sobre que ellos recaen.

Corresponde al Gobierno declarar cumplidos por las compañías extranjeras los requisitos de que trata esta disposición, previa solicitud de los interesados, acompañada de los documentos bastantes.

Para los solos efectos de este artículo se entiende por Sala Plena en lo Civil, la compuesta por la Sala de Negocios Generales y por todos los Magistrados de la Sala o Salas de Casación en lo Civil.

Artículo 9°. Toda diferencia de hecho o de carácter técnico que llegue a surgir entre los interesados y el Gobierno con motivo de los asuntos de que tratan los artículos 2°, 6°, 20, 24 (inciso 5°), 25 (incisos 2° y 3°), 31 (incisos 3° y 5°), 34, 35, 37, 39, 40 y 41, y que no pueda arreglarse en forma amigable, será sometida al dictamen de peritos nombrados así: uno (1) por el Gobierno, otro por el interesado, y otro tercero, en caso de discordia, de común

acuerdo por los peritos principales. En cada contrato se estipulará la forma de elegir el perito tercero, para el caso de que los principales no se pongan de acuerdo sobre esa designación.

Cuando no sea el caso de contratos sino de explotación de petróleo de propiedad privada, si los peritos principales no llegaren a un acuerdo sobre el nombramiento del tercero, éste será nombrado de la manera fijada en el último contrato de exploración y explotación.

En el caso de que se trata se adoptará un procedimiento análogo al establecido para el juicio de arbitramento, por los artículos 310 y siguientes de la Ley 105 de 1890; y la decisión de los peritos tendrá fuerza de sentencia con autoridad de cosa juzgada sobre la cuestión o cuestiones sometidas a su dictamen.

Además, en los respectivos contratos, pueden las partes estipular o señalar las demás cuestiones concretas que, en el evento de presentarse, deban ser dirimidas por peritos en la forma y con los efectos establecidos en este artículo.

Artículo 10. El explotador de petróleo deberá conservar almacenado en tanques especiales, o mezclado a su propio petróleo en tanques comunes, durante cuatro (4) meses a lo más, bien sea en el campo de producción o en el puerto de embarque, el petróleo que, por concepto de regalías o impuesto, le corresponda al Gobierno. Este almacenaje será gratuito durante un mes, y en los tres (3) meses siguientes, el Gobierno pagará al explotador a razón de un centavo (§ 0-01) por mes y por barril de cuarenta y dos (42) galones, almacenado en los tanques.

Con autorización del Gobierno el explotador también podrá dar cumplimiento a la obligación de que trata este artículo, conservando gratuitamente el petróleo del Gobierno en los yacimientos que se hallen en explotación.

El explotador reemplazará gratuitamente el petróleo del Gobierno que fuere destruido accidentalmente durante el tiempo que debe conservarlo el explotador. Durante el término del almacenaje, el Gobierno podrá exigir la entrega inmediata del petróleo que le corresponda y que se halle almacenado en tanques. Pero si su petróleo ha sido

conservado en los yacimientos, no podrá exigir la entrega sino mediante un aviso anticipado no menor de veinte (20) días.

Si el Gobierno no dispone del petróleo una vez vencido el término del almacenaje, cesará para el explotador la obligación de mantener almacenado ese petróleo, entregando al Gobierno, en dinero, el valor del petróleo, de acuerdo con el promedio del precio a que haya vendido el explotador su petróleo en los diez (10) días inmediatamente anteriores, o a falta de ventas, por el promedio de las cotizaciones del artículo en el mismo término.

Artículo 11. Toda persona que emprenda en el país en la exploración y explotación de petróleo de propiedad de la Nación, deberá consignar al tiempo de firmar el contrato, en el Banco de la República, en dinero o en papeles de crédito público nacional o en cédulas del Banco Agrícola Hipotecario, o en documentos de crédito agrario, computados por su valor a la par, y con el fin de garantizar al Gobierno el cumplimiento de sus obligaciones, un peso (§ 1-00) oro colombiano, por cada hectárea solicitada en contrato, pero sin que baje de veinticinco mil pesos (§ 25.000-00) el monto mínimo del depósito. Terminado el período de exploración, la garantía se disminuirá a la suma que corresponda al número de hectáreas que el contratista retenga, sin bajar en ningún caso de veinticinco mil pesos (§ 25.000-00) la garantía definitiva.

Si se trata de contratos sobre oleoductos, el Gobierno exigirá una caución de cincuenta pesos (§ 50-00) oro colombiano, por cada kilómetro de línea principal, que se consignará en dinero o en las mismas especies determinadas en el inciso anterior.

Los intereses de los documentos de crédito y los de las cédulas del Banco Agrícola Hipotecario, dados en garantía, pertenecerán al contratista.

En los casos de declaración de caducidad del contrato por culpa del contratista, los intereses de la suma depositada como garantía, que se devenguen a partir de la fecha de aquella declaración, serán retenidos en el Banco de la República, y la caución y dichos intereses pasarán.

a ser propiedad de la Nación cuando la resolución administrativa se halle ejecutoriada, bien sea porque el contratista se haya allanado a cumplirla, o porque habiendo reclamado judicialmente contra la resolución respectiva, el Poder Judicial no la infirme o invalide.

Estos depósitos tienen carácter de prenda en favor de la Nación y el Gobierno puede aplicarlos administrativamente, en todo o en parte, al pago de las multas a que haya lugar durante el término del contrato. En caso de esta aplicación el contratista estará obligado a reponer inmediatamente el monto total de la garantía.

Artículo 12. Mientras una nueva ley no disponga otra cosa, se cede a favor de los Municipios en que se hagan explotaciones petrolíferas, una suma igual al cinco por ciento (5 por 100) del valor de la regalía pagada a la Nación por razón de sus contratos en el año anterior; y para el Departamento al cual pertenezcan tales Municipios, otra suma igual al treinta por ciento (30 por 100) del valor de la misma regalía, destinada al fomento de la instrucción pública, de la agricultura y de las vías de comunicación.

Las Asambleas Departamentales reglamentarán por medio de ordenanzas la inversión de lo que, por este concepto, corresponda tanto a los Departamentos como a los Municipios.

La participación de los Departamentos y Municipios en el territorio de los cuales se estén haciendo explotaciones en virtud de contratos celebrados con anterioridad a la vigencia de la Ley 120 de 1919, será, para esos contratos, la que existe en la actualidad.

Ni los Departamentos ni los Municipios pueden enajenar, ni comprometer, ni pignorar esta participación, y si lo hicieren perderán ipso facto el derecho a que les sea pagada.

En las Leyes de apropiaciones de las vigencias respectivas se incluirán las sumas correspondientes a las participaciones de que trata este artículo, y si no se hiciere así, el Gobierno abrirá los créditos administrativos necesarios para cubrirlas en oportunidad.

Artículo 13. La exploración y explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus derivados y su transporte, las maquinarias y demás elementos que se necesitare para su beneficio y para la construcción y conservación de refineries y oleoductos, quedan exentos de toda clase de impuestos departamentales y municipales, directos e indirectos, lo mismo que del impuesto fluvial.

El petróleo crudo y sus derivados obtenidos de explotaciones que se establezcan de acuerdo con la presente ley, quedan exentos de todo impuesto de exportación durante los primeros treinta (30) años de la respectiva explotación. El petróleo crudo colombiano quedará también exento, durante el mismo plazo de los primeros treinta (30) años de cada explotación, de cualquier impuesto de carácter especial que grave ese producto exclusivamente.

Artículo 14. La persona que celebre un contrato referente a la industria del petróleo, deberá dar permanentemente enseñanza técnica gratuita, en sus explotaciones, por períodos de dos (2) años por lo menos, hasta a tres (3) alumnos cuya elección y remuneración por sus servicios al industrial, serán determinadas de común acuerdo entre el Gobierno y el contratista.

CAPITULO II

Exploración superficial.

Artículo 15. La exploración superficial será libre en todo el territorio de la República, cuando se haga en busca del petróleo de propiedad nacional; mas cuando haya de hacerse en superficies de propiedad particular, será necesario dar aviso al dueño, quien no podrá oponerse en ningún caso, pero sí hacerse pagar del explorador el valor de los perjuicios que se le ocasionen. Es entendido que dicha exploración no constituye otra expectativa de derecho que la preferencia otorgada al primer proponente conforme al numeral 1º del artículo 16 de la presente ley.

CAPITULO III

Contratos de exploración y explotación.

Artículo 16. Toda persona natural o jurídica puede presentar propuestas para contratar la exploración con taladro y la explotación de petróleo de propiedad nacional. En el caso de que varias personas presenten propuesta para contratar la exploración y explotación de un mismo terreno, el Gobierno escogerá entre las que acrediten tener capacidad financiera suficiente, en este orden:

1º—El primer proponente que demuestre haber hecho la exploración superficial técnica de que trata el artículo anterior.

2º—Al propietario del suelo.

3º—Al que tenga trabajos de explotación más próximos al área solicitada.

4º—Al proponente de mayor área, en igualdad de condiciones.

El Gobierno reglamentará la forma como deben presentarse las propuestas y los trámites a que hayan de someterse.

Artículo 17. Con el proponente que reúna las condiciones exigidas por esta ley, y de conformidad con los decretos reglamentarios de ella, celebrará el Gobierno un contrato de exploración y explotación de petróleo de la Nación, por no menos de cinco mil (5,000), ni más de cincuenta mil (50,000) hectáreas, excepto en los casos en que determinado terreno que haya disponible para contratar no alcance a la extensión de cinco mil (5,000) hectáreas. El contrato sólo podrá referirse a una extensión continua y de figura geométrica regular que se determinará en el decreto reglamentario. El proponente que no se presente o no se allane a celebrar el contrato dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el Gobierno declare que la propuesta reúne las condiciones dichas, perderá su derecho de preferencia en favor del proponente que le siga en turno, si lo hubiere, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. Empero, el con-

tratista podrá obtener por traspaso los derechos procedentes de otro contrato de exploración y explotación celebrado por el Gobierno con persona distinta, hasta por cincuenta mil (50,000) hectáreas; mas en ningún caso una sola persona natural o jurídica podrá ejercitar, en forma alguna, derechos de exploración o explotación sobre un total que pase de cien mil (100,000) hectáreas, en virtud de contratos celebrados bajo el imperio de la presente ley.

No obstante lo previsto en el inciso anterior, el Gobierno podrá celebrar contratos para la exploración y explotación del petróleo en los territorios no reservados situados al oriente de la cima de la Cordillera Oriental o en la Comisaria del Putumayo o en la Intendencia del Amazonas, en extensiones hasta de doscientas mil (200,000) hectáreas por cada concesión, sin que pueda ninguna empresa adquirir, directamente o por traspasos, una extensión mayor que la señalada en este inciso.

Podrán aceptarse traspasos de dos (2) o más contratos a una sola persona cuando se demuestre que la concesión o concesiones traspasadas no son, por sí solas, comercialmente explotables pero que sí podrán serlo al acumularse a la del cesionario. En caso de que el traspaso o traspasos sean aceptados por el Gobierno, el concesionario deberá cumplir respecto de cada concesión, las disposiciones de la presente ley, especialmente la consignada en el inciso final del artículo 20, y todas las obligaciones de cada contrato.

Corresponde al Gobierno aceptar o negar los traspasos; pero de modo alguno podrá el Gobierno autorizar traspaso que implique transgresión del precepto prohibitivo contenido en los incisos anteriores, o sea que conduzca al exceso del límite allí fijado, ni tampoco podrá aceptar traspaso alguno a Gobierno extranjero. Queda derogado el numeral cuarto (4º) del artículo 23 de la Ley 120 de 1919.

Todo contratista podrá devolver, previo aviso al Gobierno, a partir del final del segundo año de perfeccionado el contrato, y de año en año, en todo el período de la

exploración, lotes no menores de cinco mil (5,000) hectáreas y de longitud que sea aproximadamente dos y media (2½) veces la latitud.

Artículo 18. La exploración y explotación de cada área solicitada se pactarán en un solo contrato.

El período de exploración será de tres (3) años, a partir del perfeccionamiento del contrato, prorrogable, de año en año, hasta por tres (3) más, cuando el contratista compruebe que dicho período ha sido insuficiente, aun habiendo cumplido los requisitos que la ley y los reglamentos le imponen, para lograr los fines de la exploración, entendiéndose por ésta el conjunto de trabajos geológicos y de perforación tendientes a averiguar si los terrenos materia de la concesión contienen o no petróleo en cantidades comercialmente explotables.

Terminado el plazo de exploración, el contratista deberá dar principio a la explotación comercial de la concesión en las condiciones que previene esta ley.

El plazo de la explotación será de treinta (30) años, a partir del día del vencimiento definitivo del período de la exploración, comprendidas las prórrogas de éste, si las hubiere, otorgadas al tenor del presente artículo, sin perjuicio de que la explotación comience antes de vencerse aquel período.

El período de explotación será prorrogable hasta por diez (10) años más, a opción del contratista, si éste se somete a pagar al Gobierno las regalías y los impuestos que al expirar los treinta (30) años establezcan las leyes vigentes a la sazón, y se obliga, además, a cumplir las disposiciones legales que rijan en la época de la prórroga.

En las concesiones que se otorguen sobre las zonas de que trata el inciso segundo del artículo 17, el período de exploración será de cinco (5) años, prorrogable de año en año hasta por tres (3) más, llenados los mismos requisitos que establece este artículo para las demás zonas.

Es entendido que si el contratista pierde sus derechos a la exploración por incumplimiento de sus obligaciones, consecuentemente quedan extinguidos sus derechos de explotador.

Artículo 19. El contratista pagará anualmente y por anticipado, durante el periodo de exploración, un canon superficiario de diez centavos (§ 0-10) por cada hectárea de los terrenos nacionales contratados, durante los dos (2) primeros años; de veinte centavos (§ 0-20), por hectárea, durante el tercer año; de treinta centavos (§ 0-30), durante el cuarto año; de cuarenta centavos (§ 0-40), durante el quinto año, y de cincuenta centavos (§ 0-50), durante el sexto año. Si se trata de exploraciones en los terrenos señalados por el inciso 2º del artículo 17, el canon superficiario del sexto año en adelante será de cincuenta centavos (§ 0-50).

Se entiende que la superficie encerrada dentro de los límites de un contrato de exploración y explotación, podrá ser objeto de las aplicaciones que contemplan las leyes sobre baldíos, en cuanto no se estorbe el ejercicio de las servidumbres establecidas en favor de la industria del petróleo, de que trata el artículo 7º de esta ley; y que respecto a cultivadores o colonos establecidos con anterioridad al contrato o a la apertura de los pozos, el contratista deberá pagarles previamente en caso de que ocupe sus mejoras parcialmente para el ejercicio de tales servidumbres, la indemnización de que trata el Código de Minas vigente. Si la ocupación es total, se aplicará lo dispuesto en el artículo 3º de esta ley.

El Gobierno, en cada caso, de acuerdo con las necesidades de la industria del petróleo, determinará con el contratista el área que no podrá ser ocupada sino con permiso de este último, pero en ningún caso se ocupará sin el consentimiento del contratista un área de quinientos (500) metros de radio al rededor de los pozos e instalaciones.

El canon superficiario se exigirá, y deberá ser pagado por el contratista, aunque durante el periodo de la exploración el Gobierno llegue a adjudicar a distinta persona las superficies baldías comprendidas en el contrato de exploración y explotación y que originan el canon a que se refiere este artículo.

Artículo 20. Ningún concesionario de explotación podrá restringir la producción de petróleo de su empresa a una

cantidad menor de la cuarta parte ($\frac{1}{4}$) de la capacidad productora máxima de sus pozos, salvo que lo haga previo permiso del Gobierno, permiso que no podrá exceder de un año en cada caso. Al computar la producción máxima de los pozos no se tendrán en cuenta aquellos que nunca han sido utilizados para la producción.

Si el concesionario de explotación restringe la producción a una cantidad menor de la dicha cuarta parte ($\frac{1}{4}$) sin el consentimiento del Gobierno, éste cobrará sus regalías sobre la base de la cuarta parte ($\frac{1}{4}$) de la capacidad productora máxima de los pozos del concesionario.

En caso de desacuerdo entre el Gobierno y el concesionario sobre la fijación de la capacidad productora máxima de los pozos, la diferencia será resuelta por peritos nombrados como lo dispone el artículo 9º de esta ley.

En el decreto reglamentario de la presente ley se fijará la inversión anual mínima que todo contratista debe hacer en el desarrollo de los trabajos de explotación de la respectiva concesión, y en cada contrato se acordará el número de años durante los cuales es obligatoria la inversión.

Artículo 21. Dentro de los tres (3) primeros años del contrato, el contratista demarcará los límites del área contratada, por medio de mojones adecuados, y presentará un plano de ella al Ministerio respectivo, de acuerdo con los requisitos que ordenen los reglamentos del Gobierno sobre el particular.

Los concesionarios en las zonas de que trata el inciso segundo del artículo 17, tendrán cinco (5) años para cumplir la obligación consignada en el inciso anterior.

Al final de cada año el contratista presentará al Ministerio respectivo un mapa geológico y un perfil transversal de la parte explorada o explotada, con una memoria explicativa, en la cual dará cuenta de los trabajos que haya ejecutado en el mismo tiempo, todo lo cual deberá estar de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que expedirá el Gobierno.

Artículo 22. El contratista podrá principiar los trabajos de explotación en cualquier época del período de exploración, de acuerdo con el artículo 18, dando aviso al Gobierno, aviso al cual acompañará los planos, cartas geológicas y memoria descriptiva referentes al área que desee poner en explotación.

El Gobierno podrá exigir que los planos, cartas geológicas y memoria descriptiva de que se trata, se completen debidamente en el caso de deficiencia en los presentados.

Artículo 23. Cuando una estructura petrolífera se encuentre localizada en dos (2) o más terrenos correspondientes a distintos interesados, y tal circunstancia dé lugar a conflictos entre ellos, tales interesados estarán obligados, si el Gobierno así lo dispone, a poner en práctica un plan cooperativo en la explotación, plan acorde con la técnica y que el Gobierno reglamentará.

Las disposiciones de este artículo son obligatorias no sólo para los contratistas que trabajen en terrenos de propiedad nacional, sino para los explotadores en terrenos de propiedad particular o privada.

Los exploradores o explotadores de petróleo de propiedad nacional o de propiedad privada, no podrán hacer perforaciones a menos de cien (100) metros de los linderos del respectivo terreno.

Artículo 24. En cualquier tiempo, durante los términos de la exploración, se pondrá fin al contrato si se comprobare por parte del contratista no haberse hallado petróleo en cantidad comercial.

En cualquier tiempo, durante el período de la explotación, el contratista podrá renunciar su concesión en todo o en parte, siempre que tenga cumplidas todas las obligaciones del contrato hasta el día de la renuncia y quedando el Gobierno en plena libertad para celebrar con otra persona nuevo contrato sobre los mismos terrenos, en las condiciones de la ley.

Si dentro del plazo de la exploración y de sus prórrogas el contratista no hallare petróleo en cantidad comercial, podrá, al poner fin al contrato, retirar libremente las maquinarias y demás elementos que destinó a la exploración.

En los casos anteriores, y cualquiera que sea el tiempo en que el contratista ponga fin al contrato, se le devolverá la caución que haya prestado.

Quando el contrato termine por esta causa antes de vencerse los primeros veinte (20) años del período de explotación, también podrá el contratista retirar sus maquinarias y demás elementos, teniendo la Nación, respecto de ellos, los derechos de compra de que trata el inciso segundo del artículo 25.

Proporcionalmente al área devuelta según el inciso final del artículo 17, se disminuirá el canon superficiario de que trata el artículo 19.

Artículo 25. Terminado el contrato por cualquier causa, salvo lo dispuesto en el artículo anterior, el contratista dejará en perfecto estado de producción los pozos que en tal época sean productivos, y en buen estado las construcciones y otras propiedades inmuebles ubicadas en el terreno contratado, todo lo cual pasará gratuitamente a poder de la Nación con las servidumbres y bienes expropiados en beneficio de la empresa.

Respecto a la propiedad mueble, su precio se fijará por peritos, y el contratista tendrá la obligación de vendérsela al Gobierno, si así se lo exigiere dentro de los noventa (90) días siguientes a la terminación del contrato.

La determinación del carácter de mueble o inmueble, en caso de desacuerdo, la harán los peritos, teniendo en cuenta la naturaleza y destinación de tales bienes, según lo dispone el Código Civil. Los peritos serán nombrados y procederán como se indica en el artículo 9°.

Es entendido que en caso de prórroga del contrato, la reversión de las mejoras a favor de la Nación no se producirá sino al vencimiento de dicha prórroga.

La Nación podrá, en cualquier tiempo, impetrar las providencias conservatorias que le convengan para impedir que se perjudiquen o inutilicen, por culpa del contratista, el campo petrolífero o sus instalaciones y dependencias.

CAPITULO IV

Oposiciones.

Artículo 26. Admitida o escogida una propuesta de conformidad con el artículo 16, se publicará en el Diario Oficial un extracto de ella con indicación del municipio, linderos y demás datos que el Gobierno estime convenientes para que los posibles interesados puedan identificar el terreno donde hayan de hacerse la exploración y explotación. También se anunciará la propuesta en el municipio o municipios de la ubicación del terreno, por cartel que se fijará en la Alcaldía por el término de treinta (30) días, durante el cual se pregonará por bando en tres (3) días de concurso.

Mientras no hayan transcurrido sesenta (60) días hábiles, a partir del cumplimiento de las formalidades dichas, toda persona puede oponerse al contrato propuesto, formulando su oposición por escrito ante el Ministerio respectivo o ante la Gobernación, Intendencia o Comisaría donde esté ubicado el terreno, y acompañando las pruebas en que funde tal oposición.

Vencido el término señalado en el inciso anterior sin que se hayan presentado la oposición y pruebas dichas, se adelantará la tramitación de la propuesta.

Si dentro del término señalado en el inciso 2º de este artículo se formulare oposición en cuanto a la propiedad del petróleo, acompañándola de las pruebas de que trata el mismo inciso, se suspenderá la tramitación de la propuesta, y se enviará con los documentos que la acompañan, como también el escrito de oposición y las pruebas en que se apoye (loúo esto con carácter devolutivo), a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, para que dicha entidad, en juicio breve y sumario (artículos 1484 y siguientes del Código Judicial y 10 de la Ley 39 de 1921), en una sola instancia, y dando prelación al despacho de estos asuntos, decida si es o nó fundada la oposición. En dicho juicio breve y sumario serán tenidos como partes el opositor, la Nación y el proponente del contrato.

Si el fallo fuere favorable al proponente, el Gobierno podrá celebrar el contrato respectivo, quedándole al opositor vencido el derecho de demandar en juicio ordinario a la Nación, ante el Poder Judicial. El mismo derecho le quedará al presunto dueño del terreno que no hiciere la oposición dentro de los términos señalados en este artículo. Si el fallo en el juicio breve y sumario fuere adverso a la Nación, no se continuará la tramitación del contrato propuesto, pero el Gobierno podrá ejercitar las acciones que a favor de la Nación consagra el derecho común.

CAPITULO V

Requisitos para perforar y revisión de títulos.

Artículo 27. Toda persona natural o jurídica que pretenda efectuar exploraciones con perforación en busca de petróleo que repite de propiedad privada, o explotar dicho petróleo, deberá dar, en cualquiera de estos dos casos, un aviso al Ministerio respectivo, acerca de la persona para quien vayan a hacerse las exploraciones o explotaciones, la extensión y los linderos del terreno en que hayan de efectuarse y el día en que deban iniciarse.

Al aviso deberá acompañar las pruebas que demuestren el derecho a extraer el petróleo que se encuentra o pueda encontrarse en aquel terreno. Tales pruebas serán enviadas al Procurador General de la Nación para que emita concepto sobre su valor jurídico dentro del término de treinta (30) días.

En seguida el Ministerio, si fuere el caso, practicará las diligencias que estime necesarias para formar pleno conocimiento del asunto, tomará copia de las pruebas presentadas y devolverá los originales al interesado, declarando que éste cumplió con las formalidades del aviso.

Si dicha declaración de que se ha cumplido con la formalidad del aviso no es hecha por el Ministerio dentro de sesenta (60) días después de recibido dicho aviso, se presume que el interesado cumplió oportunamente con su obligación de dar el aviso y presentar sus pruebas, pudiendo emprender en la exploración o explotación pro-

yectadas, sin perjuicio del derecho de la Nación para iniciar las acciones que estime del caso.

Cuando el interesado emprenda en la exploración con perforación o en la explotación, sin dar el aviso de que trata este artículo, incurrirá en una multa de mil pesos (\$ 1,000-00) a cinco mil pesos (\$ 5,000-00), que impondrá el Ministerio respectivo por cada treinta (30) días de demora.

Artículo 28. Cuando el Ministerio del ramo, en vista de los documentos que se hayan presentado de acuerdo con el artículo anterior, o por las demás informaciones que obtenga, estime que es de la Nación el petróleo de que se trata, enviará toda la documentación a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, para que dicha entidad, en juicio breve y sumario, en una sola instancia, y dando prelación al despacho de estos asuntos, decida si es o no fundada la pretensión del interesado particular. En dicho juicio breve y sumario serán tenidos como partes la Nación y dicho interesado particular. Si el fallo fuere favorable a la Nación, el interesado particular no podrá emprender en la exploración o explotación proyectadas ni adelantarlas si ya las hubiere iniciado, pero tendrá expeditas las acciones de derecho común que sean del caso. Si el fallo en el juicio sumario de que se trata fuere adverso a la Nación, y el Gobierno insistiere en eslimar que el petróleo en referencia es de ella, procederá a dar las autorizaciones e instrucciones al respectivo Agente del Ministerio Público, o a constituir apoderado que intente las acciones que sean procedentes.

El Agente del Ministerio Público o el abogado promoverán sin demora el juicio, si fuere el caso; ejercerán, al mismo tiempo, especialmente, y sin perjuicio de las demás que sean procedentes, las acciones accesorias del demandante, establecidas por los artículos 959 del Código Civil y 407 y siguientes del Código Judicial, todas las cuales son admisibles en estos casos desde la presentación de la demanda.

Las providencias que decidan esas acciones las hará cumplir el Juez de la causa, y la Nación no está obligada

a prestar las cauciones que debe otorgar el demandante particular.

Si el demandado optare por dar la caución de que trata el artículo 414 del Código Judicial, el Tribunal la regulará oyendo al Ministerio del ramo y la exigirá prendaria, en bonos de deuda nacional o en dinero, a razón de un peso (\$ 1-00) por cada hectárea de terreno que se alegue como de propiedad particular, pero en ningún caso el depósito será menor de veinticinco mil pesos (\$ 25,000-00).

Si en el juicio que la Nación promueva en el caso de este artículo, se dicta sentencia definitiva a su favor, el explotador o quien le haya sucedido, deberá pagarle por todo el petróleo que hubiere explotado antes y después de la demanda, la diferencia entre el impuesto cubierto a la Nación, considerando aquel petróleo como de propiedad privada y la regalia correspondiente a ese petróleo declarado ya del dominio nacional. En el mismo evento de fallo favorable a la Nación, podrá el Gobierno, si lo estima conveniente y si además se considera que el demandado ha procedido de buena fe, celebrar con éste un contrato para continuar la explotación, en los términos y condiciones de la ley vigente a la fecha de la sentencia.

Las autoridades despacharán de preferencia los asuntos de que trata este artículo, y los autos de sustanciación, interlocutorios y sentencias definitivas se dictarán, y las diligencias procesales se despacharán precisamente dentro de los términos legales. Los Agentes del Ministerio Público emplearán con el mayor celo todos los medios legales para que se cumpla rigurosamente todo lo dispuesto en este artículo.

Artículo 29. De todo instrumento público referente a derechos u obligaciones sobre terrenos petrolíferos o sobre cualquier negocio relacionado con la industria del petróleo, deberá expedirse a costa de los interesados una copia que registrada se mandará al Ministerio respectivo. Los Notarios y Registradores no expedirán la primera copia ni la inscribirán, en su caso, si al mismo tiempo no se ordena la expedición y el registro de la copia destinada al Ministerio.

Si se trata de instrumentos privados referentes a derechos u obligaciones relacionados con la industria del petróleo, que los interesados quieran o dehan registrar, el Registrador no lo hará, si al mismo tiempo no se le presenta copia para la inscripción, con destino al Ministerio respectivo.

Las copias de que trata este artículo serán entregadas por los interesados en el Ministerio, dentro de los sesenta (60) días siguientes al registro. Los Notarios y Registradores darán inmediato aviso al Ministerio del ramo de haberse otorgado el instrumento respectivo y efectuado el registro correspondiente. La infracción de cualquiera de las obligaciones que por esta disposición se les imponen a los interesados y a los Notarios y Registradores, dará lugar a una multa de cien pesos (\$ 100-00) a mil pesos (\$ 1,000-00) por cada treinta (30) días de demora en su cumplimiento, multa que impondrá el Ministerio a favor del tesoro nacional.

Artículo 30. En los contratos que sobre exploración y explotación celebre el Gobierno, es bien entendido que la Nación no queda obligada a prestación ni a indemnización alguna a favor del contratista, en caso de que un tercero demuestre, en forma legal, tener derecho sobre el petróleo materia del contrato.

CAPITULO VI

Regalías.

Artículo 31. Todo concesionario de exploración y explotación de petróleo de propiedad nacional pagará al Gobierno, en el puerto de embarque de sus productos, en producto bruto o en dinero, a voluntad del Gobierno, las participaciones que le correspondan a la Nación, de acuerdo con la siguiente escala:

De 0 a 100 kilómetros, el 11 por 100 del producto bruto explotado.

De 100 a 200 kilómetros, el 10 por 100 del producto bruto explotado.

De 200 a 300 kilómetros, el 9 por 100 del producto bruto explotado.

De 300 a 400 kilómetros, el 8 por 100 del producto bruto explotado.

De 400 a 500 kilómetros, el 7 por 100 del producto bruto explotado.

De 500 a 600 kilómetros, el 6 por 100 del producto bruto explotado.

De 600 a 700 kilómetros, el 5 por 100 del producto bruto explotado.

De 700 a 800 kilómetros, el 4 por 100 del producto bruto explotado.

De 800 a 900 kilómetros, el 3 por 100 del producto bruto explotado.

Más de 900 kilómetros, el 2 por 100 del producto bruto explotado.

Las distancias previstas en la tabla anterior se computarán por el respectivo oleoducto entre el centro de recolección de la empresa y el puerto de embarque de los productos del concesionario.

Puede asimismo el Gobierno exigir la participación en el centro de recolección del petróleo de la respectiva concesión, en producto bruto. En este caso el concesionario le entregará al Gobierno el porcentaje que le corresponda de acuerdo con la tabla anterior, más la cantidad de petróleo crudo que equivalga al valor del transporte de dicha participación, desde el centro de recolección del campo productor hasta el puerto de embarque de los productos del concesionario, según las tarifas vigentes del oleoducto; la cantidad adicional de petróleo crudo que debe entregarse al Gobierno por concepto de transporte, se determinará dividiendo el valor de dicho transporte por el precio de un barril de ese petróleo crudo en el campo respectivo, precio que se fijará de conformidad con la disposición contenida en el artículo 34.

Cuando las regalías se exijan en petróleo crudo se pagarán por trimestres vencidos.

A falta de exportación y de oleoducto, el cobro se hará tomando como base el puerto más cercano adonde se con-

sidere prácticamente factible llevar un oleoducto. A este oleoducto imaginario se aplicarán las tarifas del oleoducto más cercano. A falta de acuerdo entre el Gobierno y el interesado sobre la elección del puerto, o sobre la longitud del oleoducto imaginario, la cuestión será resuelta por peritos, como se prevé en el artículo 9°.

Las regalías podrán ser cobradas por el Gobierno, tomando una parte en especie y otra en dinero en el puerto de embarque, o una parte en especie en el centro de recolección del campo petrolífero y otra en dinero en el puerto de embarque. Si el Gobierno desea tomar parte de sus regalías en especie, puede distribuir esa parte como quiera entre el puerto de embarque y el centro de recolección.

Cuando el petróleo provenga de yacimientos cubiertos por las aguas del mar territorial, el porcentaje del once por ciento (11 por 100) fijado en la tabla anterior, se rebajará al ocho por ciento (8 por 100).

El Gobierno avisará al concesionario, con no menos de seis (6) meses de anticipación, el modo como hará uso de las opciones contenidas en este artículo.

Para los efectos de esta ley, se entiende por puerto de embarque el marítimo o fluvial adonde lleguen buques tanques marítimos.

Artículo 32. Los concesionarios de exploración y explotación de petróleo de propiedad nacional que beneficien los gases naturales y obtengan de ellos el producto llamado gasolina natural, pagarán al Gobierno una trigésima (1/30) parte del producto bruto obtenido, o su equivalente en dinero por el precio efectivo de cada galón comerciable (galón americano, patrón o standard), en el mercado que se señale en el contrato.

No habrá lugar al pago de la trigésima (1/30) parte de la gasolina o su equivalente en dinero, como se dispone en el inciso que precede, cuando el concesionario, en vez de vender la gasolina natural o utilizarla por separado en otra forma, la mezcle al petróleo crudo.

Si el concesionario vende o usa gases naturales con fines industriales pagará al Gobierno cinco centavos

(\$ 0-05) por cada diez mil (10,000) pies cúbicos de gas vendido o usado.

El Gobierno en cada contrato acordará y estipulará los métodos que deben emplear los concesionarios para evitar el desperdicio del gas.

El Gobierno queda facultado para reglamentar la forma como debe medirse el gas natural a fin de verificar la liquidación prevista en este artículo.

Cuando la cantidad de gas natural húmedo producido en la concesión justifique, a juicio del Gobierno y del contratista, la construcción de una planta para la extracción de gasolina natural, el contratista procederá a instalarla y a beneficiar los gases de que se trata.

Artículo 33. Las regalías de que trata este capítulo se cobrarán después de descontar el petróleo crudo y el gas que se consuman en beneficio de la respectiva concesión, dentro de los linderos de la misma.

Artículo 34. Cuando las regalías señaladas en el artículo 31 se exijan en dinero, se pagarán mensualmente sobre la base del precio medio, durante el mes anterior, del petróleo crudo respectivo en el puerto de embarque.

Si el dicho petróleo crudo no tuviere precio comercial en el puerto de embarque, se tomará como base el precio medio, durante el mes anterior, del mismo petróleo, o de otro petróleo crudo equivalente que para tal efecto se convenga durante la explotación, entre el Gobierno y el contratista, en el mercado que se señale en el contrato.

Del precio medio del petróleo deberá deducirse el costo de transporte desde el puerto de embarque hasta el mercado regulador. Dicho costo incluirá todos los gastos necesarios tales como los fletes según las tarifas usuales, derechos de puerto y gastos de trasiego.

A falta de acuerdo entre el Gobierno y el contratista sobre la elección del petróleo equivalente para los efectos indicados en el inciso segundo de este artículo, la cuestión será resuelta por peritos como se prevé en el artículo 9°.

CAPITULO VII

Impuesto sobre el petróleo de propiedad privada.

Artículo 35. Todo explotador de petróleo de propiedad privada pagará al Estado el impuesto que le corresponda, según la distancia del centro de recolección del petróleo de sus explotaciones al puerto de embarque de sus productos, de acuerdo con la siguiente escala:

De 0 a 100 kilómetros, el 8 por 100 del producto bruto explotado.

De 100 a 200 kilómetros, el 7 por 100 del producto bruto explotado.

De 200 a 300 kilómetros, el 6 por 100 del producto bruto explotado.

De 300 a 400 kilómetros, el 5 por 100 del producto bruto explotado.

De 400 a 500 kilómetros, el 4 por 100 del producto bruto explotado.

De 500 a 600 kilómetros, el 3 por 100 del producto bruto explotado.

De 600 a 700 kilómetros, el 2½ por 100 del producto bruto explotado.

De 700 a 800 kilómetros, el 2 por 100 del producto bruto explotado.

De 800 a 900 kilómetros, el 1½ por 100 del producto bruto explotado.

Más de 900 kilómetros, el 1 por 100 del producto bruto explotado.

Sobre la gasolina natural y el gas natural se pagará como impuesto el sesenta por ciento (60 por 100) de la regalia fijada en el artículo 32 sobre el gas y la gasolina naturales de propiedad nacional.

Los impuestos a que se refieren los incisos anteriores se cobrarán y liquidarán en la misma forma establecida en el capítulo VI de esta ley para el cobro y liquidación de las regalías del Estado, con la excepción de que el mercado regulador de que tratan los artículos 32 y 34 será en

el presente caso el que de común acuerdo señalen el Gobierno y el explotador de petróleo de propiedad particular. A falta de ese acuerdo, se tomará como regulador el mercado adonde haya destinado la mayor parte del petróleo de la respectiva explotación en el tiempo en que deben pagarse los impuestos. El Gobierno tendrá las mismas opciones que en dicho capítulo se establecen y deberá dar el aviso del ejercicio de su opción como se dispone en el capítulo citado.

Si por leyes posteriores se elevaren los impuestos fijados en este capítulo, el aumento no regirá para las explotaciones de petróleo de propiedad privada que estuvieren establecidas cuando éntre en vigencia la nueva ley.

CAPITULO VIII

Transportes.

Artículo 36. Toda persona que explote petróleo, bien sea de la Nación o de propiedad particular, tiene derecho a construir y beneficiar uno o más oleoductos para el servicio de su propia explotación y durante el término de ésta.

Cuando haya concesionarios de explotación que individualmente no alcancen a producir petróleo en cantidad suficiente para abastecer un oleoducto hasta puerto de embarque, hecho que deberán probar a satisfacción del Gobierno, podrán asociarse para construir un oleoducto común que servirá exclusivamente sus respectivas concesiones.

Pueden asimismo construir y beneficiar oleoductos las compañías no explotadoras de petróleo, previo contrato con el Gobierno y de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

El Gobierno también podrá construirlos o contratar la construcción y explotación de ellos.

Artículo 37. La ruta general de todo oleoducto, que será la que prácticamente resulte más corta de acuerdo con la técnica, así como la localización de su terminal marítimo o fluvial en el puerto de embarque que haya elegido el

empresario, serán sometidos a la aprobación del Gobierno. Obtenida esta aprobación, el interesado no podrá proceder a las construcciones de tales oleoductos sin someter a la aprobación del Gobierno el trazado definitivo, los planos y los presupuestos detallados de construcción y explotación, y las especificaciones correspondientes, y el Gobierno sólo podrá negar su aprobación por razones de orden técnico.

El Gobierno al reglamentar esta ley señalará los términos dentro de los cuales deben despacharse las solicitudes a que se refiere este artículo.

En caso de una diferencia sobre las razones de orden técnico por las cuales el Gobierno niega su aprobación al trazado definitivo, y a dichos planos, presupuestos y especificaciones, el asunto se resolverá por peritos nombrados de conformidad con el artículo 9º de esta ley.

Artículo 38. Todos los oleoductos que se construyan en el país de conformidad con las disposiciones de esta ley, por compañías no explotadoras, serán considerados como empresas públicas de transporte. El Gobierno tendrá sobre ellos un derecho de preferencia para el acarreo de todos sus petróleos. En los oleoductos de uso privado tal preferencia está limitada a los petróleos procedentes de las regalías o impuestos correspondientes a la producción servida por el oleoducto de que se trata. En todo caso, el Gobierno deberá pagar el acarreo de acuerdo con las tarifas vigentes al tiempo de efectuarlo.

El derecho de preferencia será hasta del veinte por ciento (20 por 100) de la capacidad transportadora diaria del respectivo oleoducto.

Artículo 39. El Gobierno, de acuerdo con los contratistas de exploración y explotación o de oleoductos, o de acuerdo con los explotadores de petróleo de propiedad privada, fijará las tarifas de transporte, teniendo en cuenta:

1º. La amortización del capital invertido en la construcción;

2º. Los gastos de sostenimiento, administración y explotación;

3º. Una ganancia equitativa para el empresario, que se fijará de acuerdo entre éste y el Gobierno, sobre la base de las utilidades que en otros países y especialmente en los Estados Unidos tengan las empresas semejantes de oleoductos, y teniendo en cuenta también el desarrollo económico de los campos petrolíferos servidos por el oleoducto de que se trata.

Las disposiciones de este artículo son aplicables a los otros sistemas de transporte del petróleo y sus derivados.

Ningún oleoducto que se construya en el país podrá darse al servicio sin la aprobación de las tarifas de transporte, impartida por el Gobierno de conformidad con este artículo.

En caso de no llegar a un acuerdo para la fijación de tarifas, el asunto se resolverá por peritos nombrados de conformidad con el artículo 9º de esta ley.

Artículo 40. El periodo de duración de todo contrato de oleoducto será hasta de treinta (30) años, a partir de la fecha en que se ponga en servicio, al final de los cuales pasará gratuitamente a ser propiedad de la Nación con todas las zonas, construcciones y demás bienes inmuebles adheridos al suelo como parte integrante de la empresa. El contratista tendrá obligación de entregar dichos oleoductos y elementos en buen estado de servicio. Respecto a los bienes muebles, el Gobierno tendrá los mismos derechos establecidos en el artículo 25 de la presente ley. También será aplicable lo dispuesto en dicho artículo sobre impetración de providencias conservatorias y determinación del carácter de mueble o inmueble de los bienes y fijación del precio.

Los oleoductos construidos por contratistas de exploración y explotación también pasarán gratuitamente a poder de la Nación cuando el respectivo contrato de exploración y explotación termine por cualquier causa, salvo lo dispuesto en el artículo 24 de la presente ley.

Es entendido que los oleoductos destinados al servicio de explotaciones de petróleo de propiedad particular y que no sean de uso público, no quedan comprendidos en las disposiciones de este artículo.

Artículo 41. El Gobierno de acuerdo con los explotadores de toda clase de oleoductos, revisará las tarifas de transporte por períodos de cuatro (4) años para fijar las que hayan de regir en el período siguiente y teniendo en consideración:

1°. Las ganancias convenidas para cada empresario, de acuerdo con el artículo 39;

2°. Los gastos de sostenimiento, administración y explotación debidamente comprobados, y

3°. El capital que no haya sido amortizado en la fecha de cada revisión.

En caso de no llegar a un acuerdo para la revisión de tarifas, el asunto se resolverá por peritos nombrados de conformidad con el artículo 9° de esta ley.

Artículo 42. Establécese un impuesto de transporte por oleoductos de uso público igual al dos y medio por ciento (2½ por 100) del valor resultante de multiplicar el número de barriles transportados, por la tarifa vigente para cada oleoducto.

Este impuesto se cobrará por trimestres vencidos.

CAPITULO IX

Refinerías.

Artículo 43. La refinación del petróleo crudo es libre dentro del territorio nacional.

El Gobierno podrá conceder permisos, por un término que no exceda de treinta (30) años, para el establecimiento de refinerías o estaciones de abasto de combustibles en los terrenos o lugares que por ley o decreto se declaren como reserva de la Nación. La remuneración y demás condiciones del permiso se determinarán en los respectivos contratos que al efecto se celebren.

El Gobierno podrá establecer y explotar refinerías o contratar su construcción o explotación para beneficiar los petróleos crudos que le correspondan por concepto de regalías o impuestos, o que adquiera a cualquier título. Deberá hacer uso de esta autorización tan pronto como las circunstancias indiquen la conveniencia de regularizar

los precios de los refinados en beneficio de la economía del país y de los intereses de la colectividad.

Artículo 44. Autorízase al Gobierno para montar una o más fábricas de empaques destinados a los productos que se deriven del petróleo crudo, en el lugar o lugares que aconsejen las circunstancias económicas del país.

El Gobierno venderá sus empaques a precio de costo.

Artículo 45. El petróleo que recibe la Nación por concepto de regalías o impuestos, podrá venderlo el Gobierno sin sujeción a los trámites establecidos en las leyes fiscales, con la sola condición de que el precio de venta no sea inferior al que ofrezca el explotador que paga la regalía o impuesto.

Para la venta se oirá previamente el concepto de la Junta Asesora.

Ninguna venta de las que se hicieren de acuerdo con esta autorización podrá comprender más petróleo del que obtenga el Estado en tres (3) años. Los contratos de venta que se extiendan a más de tres (3) años serán sometidos a la aprobación del Congreso.

CAPITULO X

Sanciones, caducidad de los contratos y permisos.

Artículo 46. Al reglamentar la presente ley el Gobierno podrá imponer administrativamente multas hasta de cinco mil pesos (\$ 5,000-00), en cada caso, para penar el incumplimiento de las obligaciones que en ella se establecen o que señalen los decretos respectivos, cuando el incumplimiento no deba producir caducidad de contratos o cancelación de permisos, o cuando el Gobierno prefiera optar por esta sanción y no declarar la caducidad en los casos pertinentes del artículo 47.

Artículo 47. El Gobierno, oída la Junta Asesora, podrá declarar la caducidad de cualquier contrato que celebre o cancelar el permiso que conceda, referentes a la industria del petróleo, en cada uno de los casos siguientes:

1°. Cuando no se paguen oportunamente a la Nación las regalías o los impuestos que le correspondan, o cuando se

deseo al Gobierno el derecho preferencial para transportar sus petróleos;

2°. Cuando no se inicie la explotación o transporte en el plazo fijado para ello en los contratos, o si una vez iniciadas estas operaciones, se suspendieren por más de ciento veinte (120) días en un año, sin auencia del Gobierno;

3°. Cuando en caso de que una estructura petrolífera corresponda a distintos contratistas, y ocurriendo entre ellos conflictos por tal motivo, se nieguen a poner en práctica el plan cooperativo de explotación, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley;

4°. Cuando en los casos del artículo 9°, el contratista se niegue a someter la diferencia al dictamen pericial o se niegue a cumplir lo resuelto por los peritos;

5°. Cuando no se tenga permanentemente constituida y domiciliada en Bogotá una casa o sucursal, según lo dispuesto en el artículo 8°;

6°. En caso de quiebra del contratista, judicialmente declarada;

7°. Cuando el contratista traspase el contrato a un Gobierno extranjero, y

8°. Cuando el contratista deje de hacer la inversión anual de que trata el inciso final del artículo 20.

La declaración administrativa de caducidad o la cancelación del permiso no se harán sin que previamente se notifiquen al interesado las causales que se aleguen, notificación que se llevará a cabo en la forma que se determine en cada contrato.

El interesado dispondrá de un término de noventa (90) días, contados desde que quede hecha la notificación respectiva para que rectifique o subsane las faltas de que se le acuse o formule su defensa.

CAPITULO XI

Disposiciones finales.

Artículo 48. El Gobierno hará practicar estudios de las reservas petrolíferas de que trata esta ley, y a este fin se le faculta ampliamente para contratar el personal y para hacer todos los gastos que demanden dichos estudios.

El Gobierno proveerá a la formación en el exterior y dentro del país, del personal colombiano técnico y práctico en la industria del petróleo en todos sus ramos.

Artículo 49. Los contratos o permisos de que trata la presente ley requerirán para su validez la aprobación del Presidente de la República, oído el dictamen de la Junta Asesora de Petróleos, y previo concepto favorable del Consejo de Ministros, y la declaración hecha por el Consejo de Estado de que se ajustan a las disposiciones legales. Cumplidos estos requisitos se elevarán los contratos a escritura pública.

Artículo 50. En los trámites administrativos de que trata la presente ley se observarán las reglas de procedimiento judicial que sean compatibles con la naturaleza de aquéllos, a fin de llenar los vacíos que puedan presentarse

Artículo 51. Créase una junta que se llamará Junta Asesora de Petróleos, compuesta de cinco (5) miembros designados así: dos (2) por el Poder Ejecutivo, uno (1) por la Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, y uno (1) por cada una de las Cámaras Legislativas. El Ministro respectivo convocará la Junta, la presidirá, tendrá voz en ella y podrá consultarla respecto de cualquier asunto relacionado con la industria del petróleo.

Los miembros de la Junta Asesora de Petróleos serán designados para periodos de tres (3) años, y podrán ser reelegidos. Cada uno de los miembros de la Junta ganará quince pesos (\$ 15-00) por toda sesión a que concurra.

Los miembros de la Junta Asesora de Petróleos no podrán gestionar en asuntos relacionados con negocios de petróleos.

Artículo 52. Sobre el petróleo de propiedad nacional que haya en el Departamento Norte de Santander, en los territorios de las Comisarias de Arauca, Vichada y Vaupés, y en los determinados en los numerales a) y b) del artículo 4° de la Ley 72 de 1925, podrá el Gobierno celebrar contratos especiales que requerirán para su validez la aprobación del Congreso.

Artículo 53. El petróleo de propiedad de la Nación sólo podrá explotarse en virtud de contratos que se inicien y perfeccionen de conformidad con la presente ley.

Artículo 54. Ninguna persona natural o jurídica podrá hacer en Colombia levantamientos aerofotogramétricos sin permiso del Gobierno, a quien deberá entregar una copia del trabajo realizado.

Artículo 55. Quedan derogadas las disposiciones anteriores a la presente ley, que regula integralmente la materia, y seguirán rigiendo, además de los numerales citados en el artículo 52, el artículo 41 de la Ley 120 de 1919, el artículo 17 de la Ley 14 de 1923, la Ley 4ª de 1921, la Ley 13 de 1922 y todas aquellas disposiciones que de modo especial hayan hecho declaración de dominio o de reserva de dominio de la Nación sobre el petróleo, en lo referente a dicha declaración.

Artículo 56. Igualmente queda en vigencia el artículo 2º de la Ley 29 de 1921 modificado por el artículo 9º de la Ley 110 de 1922.

Dada en Bogotá a dos de marzo de mil novecientos treinta y uno.

El Presidente del Senado,

CARLOS JARAMILLO ISAZA

El Presidente de la Cámara de Representantes,

EDUARDO LEMA V.

El Secretario del Senado,

Antonio Orduz Espinosa

El Secretario de la Cámara de Representantes,

Fernando Restrepo Briceño

Poder Ejecutivo—Bogotá, marzo 4 de 1931.

Publíquese y ejecútese.

ENRIQUE OLAYA HERRERA

El Ministro de Industrias,

Francisco José CHAUX

RESOLUCION NUMERO 28 DE 1931

(4 de marzo)

sobre recibo y trámite de propuestas para explotar petróleos de propiedad de la Nación.

El Ministro de Industrias,

en uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO

Que el Poder Ejecutivo acaba de sancionar la Ley del petróleo (número 37 del corriente año);

Que de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 4ª de 1913, la Ley del petróleo sólo entrará en vigencia dos meses después de su publicación en el *Diario Oficial*; y

Que mientras tanto sería extemporánea la presentación y trámite de las propuestas que para explotar petróleo de propiedad de la Nación pudieran hacerse,

RESUELVE:

Artículo único. Sólo serán recibidas y tramitadas las propuestas que se presenten sobre explotación de petróleo de propiedad de la Nación cuando éntre en vigencia la Ley 37 del corriente año.

Comuníquese y publíquese.

Dada en Bogotá a 4 de marzo de 1931.

El Ministro de Industrias,

Francisco José CHAUX

REPUBLICA DE COLOMBIA — MINISTERIO DE INDUSTRIAS

SECCION DE PUBLICACIONES. JEFE, BELISARIO VEJARANO S.

LEY 37 DE 1931

“DEL PETROLEO”

TEXTO OFICIAL — TRADUCCION AL INGLES



IMPRESA NACIONAL — BOGOTA — 1931

MINISTRO DE INDUSTRIAS
DOCTOR FRANCISCO JOSE CHAUX

SECRETARIO DEL MINISTERIO
DOCTOR ENRIQUE CASAS

INTERVENTOR DE PETROLEOS
MANUEL ARCHILA M., C. E. & P. E.

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MINAS Y PETROLEO
DOCTOR ANIBAL CARDOSO GAITAN

JEFE DE LA SECCION TERCERA (FISCALIZACION)
LUIS VARGAS VASQUEZ, I. C.

LAW 37 OF 1931

"PETROLEUM"

The Congress of Colombia

ENACTS:

CHAPTER 1

General provisions.

Article 1. The provisions of this law refer to the natural mixtures of hydrocarbons found in the earth, whatever their physical state, and which make up, accompany or are derived from crude oil.

For the purposes of the present law, the natural mixtures of hydrocarbons referred to in the foregoing paragraph are termed *petroleum*.

Article 2. The Nation reserves helium and other rare gases which may be found in deposits which are the property of the Nation. These gases, therefore, may be exploited directly by the Nation or under contract. If during the exploration or exploitation of a concession wells should be found containing any of the gases reserved by this article, such wells can be taken over by the Government upon payment to the concessionaire of the duly proved cost of drilling, plus ten per cent (10 per 100). The Government may also install within the concession, for its own account, directly or by contract, such works as may be necessary for the extraction of the gases in such manner as not to interfere with the operations of the

concessionaire. Whenever the Government shall extract the rare gases for its own account, it shall return to the concessionaire the gases which it does not use and shall indemnify the concessionaire for the waste caused by the separation of the helium or other rare gases.

If case of failure to agree upon the cost of the drilling of the wells taken over by the Government, the matter shall be submitted to the decision of experts in accordance with the provisions of Article 9 of this law.

Article 3. The petroleum industry in its branches of exploration, exploitation, refining, transportation and distribution is declared to be of public utility. Therefore, the expropriations necessary for the conduct and development of such industry may be authorized by decree of the appropriate Ministry on application of the legitimately interested party.

The Judges of the Circuit in which the real property in question is located shall have original jurisdiction of the expropriation proceedings. Appeals may be taken to the Superior Tribunal of the Judicial District. The course of these proceedings shall conform to the appropriate requirements of judicial procedure, especially those relating to expropriations for the construction of railways.

Article 4. The rights of individuals in privately owned petroleum shall be recognized and respected as provided by the Constitution, and the State shall not take any action with regard to these rights in such manner as to impair them.

Article 5. Persons engaging in the petroleum industry in the branches of exploration, exploitation, transportation and distribution shall furnish to the Government all the data obtained by them of a technical, scientific, economic and statistical character, which may be indispensable in the opinion of the Government, for making a geological and geophysical study of the coun-

try, for the compilation of the statistics of the industry, and for the calculation of the lawful taxes and royalties, rents and participations to which the Nation, in each instance, shall be entitled. Such data may be requested solely for said purposes. The Government shall maintain due secrecy in regard to such of the data furnished as, by reason of their nature, may require secrecy for the protection of the legitimate interests of such persons.

When the respective Ministry deems it necessary, it may verify directly or through its agents, the accuracy of the data referred to in the foregoing paragraph.

The persons referred to in this article shall furnish the Government employees in charge of inspection, supervision and auditing, all the necessary facilities for the proper performance of their duties.

Article 6. Colombian citizens shall have a preferential right to employment in the higher positions in all departments of oil companies under the same conditions and with the same salaries as foreign employees of like class, provided that their qualifications are not inferior to those of foreigners.

Colombian labourers shall be preferred to foreigners whenever technical qualifications are not necessary and even in that case, if their qualifications are the same.

The Government shall determine in the decree regulating this law, or in each contract, the minimum percentage of national employees and labourers to be employed by each concern.

Differences arising between the Government and the companies regarding the determination of the qualifications of national employees or labourers, shall be adjusted in accordance with the provisions of Article 9.

Article 7. The provisions of Chapters XII, XIII and XIV of the Mining Code, relative to "easements granted for the benefit of mines," "indemnifications to which mine

operators are subject" and "water for mines," shall apply to the petroleum industry in the absence of special provisions of law.

Furthermore, in order to promote the exploitation of petroleum, there is granted the prerogative to constitute rights-of-way for pipelines, which shall include sufficient land for pumping stations and other facilities necessary for the operation of pipelines, and also the right to construct wharves, loading terminals and pipelines passing under the sea and under rivers, all of which rights are subject to prior compliance with the requirements set forth in Article 37.

Article 8. Because of the subject matter of the contracts as well as of the situs thereof, such contracts are governed by Colombian law and are subject to the jurisdiction of the Colombian courts. Consequently, with a view to obtaining the greatest possible authority and speed in the suits, all differences between the contracting parties in relation to the interpretation of the contracts, and all differences or controversies as to the performance, termination, rescission or lapse thereof, which cannot be settled by experts in the cases provided for in Article 9, shall be decided definitely by the Full Term in Civil Matters of the Supreme Court of Justice and in a single instance.

Companies whose principal place of business is located in a foreign country, which desire to establish themselves in Colombia and enter into contracts relating to petroleum with the Nation or with private individuals, must constitute and domicile a firm or branch at the capital of the notarial circuit of Bogotá, even though such companies are not general partnerships (*aunque no sean colectivas*), and for such purpose must comply with the formalities of Article 470 and concordant provisions of the Commercial Code; such firms shall be

considered to be colombian for all national and international purposes relating to such contracts and to the property, rights and rights of action under such contracts.

It is an attribute of the Government to declare that the requirements set forth in this article have been complied with by foreign companies, upon petition of the interested parties, supported by sufficient documentation.

Solely for the purposes of this article, the Full Term of the Court in Civil Matters shall be deemed to be the Court composed of the Part for General Business and of all the judges of the Part of Parts of Cassation in Civil Matters.

Article 9. All differences in regard to matters of fact or of a technical nature which may arise between the interested parties and the Government by reason of the matters dealt with in Articles 2, 6, 20, 24 (Paragraph 5) 25 (Paragraphs 2 and 3), 31 (Paragraphs 3 and 5), 34, 35, 37, 39, 40 and 41, and which cannot be settled amicably, shall be submitted to the judgement of experts appointed as follows: one (1) by the Government; another by the interested party; and a third, in the case of disagreement, by mutual agreement between the first-named experts. There shall be provided in each contract the manner of selecting the third expert in case the first-named experts cannot agree upon his designation.

In the case of exploitation, not under (Government) contracts but of privately owned petroleum, if the first-named experts do not reach an agreement as to the appointment of the third, he shall be appointed in such manner as may be provided in the last contract of exploration and exploitation (entered into by the Government).

For the purposes of this article, there shall be adopted procedure analagous to that provided for arbitration suits by Article 310 and following articles of Law 105 of 1890; and the decision of the experts shall have the force of a judgement and be *res adjudicata* as to the question or questions submitted to their decision.

Furthermore, in the respective contracts with the Government the parties may stipulate of specify the other concrete questions which, in case they arise, are to be decided by experts in the manner and with the effects provided for by this article.

Article 10. A petroleum operator may store, in special tanks or mixed with his own petroleum in ordinary tanks, for not more than four months, either in the producing field or at the port of shipment, petroleum belonging to the Government by reason of royalties or tax. Such storage shall be free of charge for one month and in the three (3) months following the Government shall pay the operator at the rate of one centavo (\$ 0.01) per month per barrel of forty-two (42) gallons stored in the tanks.

Under authorization from the Government the operator may also comply with the obligation dealt with in this article by conserving the Government oil in the sands which are being exploited free of charge.

The operator shall replace, free of charge, any Government petroleum which may be accidentally destroyed during the time in which the operator is under the duty to conserve it. During the period of storage the Government may demand immediate delivery of the petroleum belonging to it and being stored in tanks. But if the petroleum has been conserved in the sands, such delivery may not be demanded except upon notice in advance of not less than twenty (20) days.

If the Government does not dispose of the petroleum upon the expiration of the term of storage, the obligation of the operator to maintain such petroleum in storage shall cease upon delivery to the Government in cash of the value of the petroleum in accordance with the average price for which the operator has sold his own petroleum in the ten (10) days immediately preceding, or, in case there have been no sales, at the average quotation of such products during said period.

Article 11. Every person undertaking in Colombia the exploration and exploitation of petroleum belonging to the Nation, must deposit in the Bank of the Republic, at the time of signing the contract, in cash or in securities of the national public debt, or in mortgage bonds (cédulas) of the Agricultural Mortgage Bank, or in securities of rural credit, at their par value, to guarantee the performance of his obligations to the Government, one peso (\$ 1.00) colombian gold for each hectare petitioned for, but in no event shall such deposit be less than twenty-five thousand pesos (\$25,000). Upon the termination of the period of exploration, the security shall be reduced to an amount proportional to the number of hectares retained by the contractor, but in no event shall the final security be less than twenty-five thousand pesos (\$ 25,000).

In the case of pipeline contracts, the Government shall require security to the amount of fifty pesos (\$50.00) colombian gold for each kilometer of main line, which security shall be deposited in money or in the same securities as provided in the foregoing paragraph.

Interest on national securities and on mortgage bonds of the Agricultural Mortgage Bank, deposited as a guaranty, shall belong to the contractor.

In the case of a declaration of lapse of the contract through fault of the contractor, interest on the amount

deposited as a guaranty accruing after the date of such declaration shall be retained in the Bank of the Republic, and the security, together with such interest, shall become the property of the Nation when the administrative resolution has become final, either because the contractor has submitted to compliance therewith, or because, after having appealed to the courts against the respective resolution, the judicial power shall not reverse or invalidate it.

Such deposits are a pledge to the Nation, and the Government may, by administrative action, apply the same, either in whole or in part, to the payment of any fines which may be imposed during the term of the contract. In case of such application, the contractor shall be under the obligation of immediately restoring the full amount of the guaranty.

Article 12. Until and unless otherwise provided by a new law, there is hereby assigned to the municipalities in which petroleum exploitation is carried on an amount equivalent to five per cent (5 per 100) of the value of the royalty paid to the Nation under its contracts in the preceding year, and to the Department to which such municipalities belong another amount equal to thirty per cent (30 per 100) of the value of such royalty, which amount shall be applied to the development of public education, agriculture and means of transportation.

The Departmental Assemblies shall by ordinance regulate the investment of the amounts belonging to the departments and the municipalities under this provision.

The participation of the Departments and Municipalities within the territory where exploitations are being carried on under contracts entered into prior to the time Law 120 of 1919 went into effect shall, as to such contracts, be the participation now in force.

Neither the Departments nor the Municipalities shall alienate, burden or hypothecate such participation, and if they so do, they shall *ipso facto* lose the right to such payment.

The amounts of the participations dealt with in this article shall be included in the appropriation laws of the respective fiscal years, and in case of failure to do so, the Government shall open the necessary administrative credits for the due payment of the same.

Article 13. The exploration and exploitation of petroleum, the petroleum which may be obtained, its derivatives and its transportation, the machinery and other materials necessary for its production and for the construction and maintenance of refineries and pipelines, shall be exempt from departmental and municipal taxes, either direct or indirect, of every kind, as well as from the river transportation tax.

Crude petroleum and the derivatives thereof obtained from exploitations undertaken in accordance with this law shall be exempt from export taxes during the first thirty years of each exploitation. Colombian crude petroleum shall also be exempt during the same period of the first thirty years of each exploitation from any special tax burdening said product exclusively.

Article 14. A person entering into a contract relating to the petroleum industry must furnish permanently, free of charge, technical instruction, at his field of operations, for periods of not less than two years, to at least three (3) students, whose selection and remuneration for their services to the operator shall be determined by mutual agreement between the Government and the contractor.

CHAPTER II

Surface exploration.

Article 15. Surface exploration shall be freely permitted throughout the territory of the Republic when done in prospecting for petroleum belonging to the Nation; but when it is done on privately owned surface areas, it shall be necessary to give notice to the owner: such owner shall in no event have any right to make opposition, but shall have the right to receive payment from the explorer for the amount of the damages which he may suffer. It is understood that such exploration does not constitute any expectancy of rights other than the preference granted to the first applicant in conformity with paragraph 1 of Article 16 of this Law.

CHAPTER III

Contracts for exploration and exploitation.

Article 16. Every natural or juristic person may submit proposals for a contract for exploration by drilling and exploitation of petroleum belonging to the Nation. In the event that proposals are submitted by several persons for a contract for the exploration and exploitation of the same tract, the Government shall make selection among the persons who furnish proof of sufficient financial responsibility, in the following order:

- 1). To the first applicant who furnishes proof of having carried on technical surface exploration, as provided in the preceding article;
- 2). To the owner of the surface;
- 3). To the applicant who is operation nearest to the area petitioned for;

4). To the applicant for the largest area, other conditions being equal.

The Government, by regulation, will prescribe the manner in which applications are to be submitted and the proceedings by which they are to be governed.

Article 17. The Government will enter into a contract for exploration and exploitation of petroleum belonging to the Nation with the applicant who meets the conditions required by this law, and in conformity with the decrees regulating it, for not less than 5,000 nor more than 50,000 hectares, except in cases where any particular tract available for contract is of an area less than five thousand (5,000) hectares. The contract may only be entered into with reference to a continuous area of a regular geometrical figure to be specified in the regulations. Any applicant who does not appear or is unwilling to enter into the contract within ninety (90) days after the date of declaration by the Government that the proposal meets said conditions, shall lose his preferential right in favour of the applicant next in order, if any, in accordance with the provisions of the preceding article. Nevertheless, a contractor may, by assignment, obtain rights proceeding from another contract of exploration and exploitation entered into by the Government with another person, up to 50,000 hectares; but in no event may any one natural or juristic person exercise in any manner whatsoever exploration or exploitation rights for a total area in excess of one hundred thousand (100,000) hectares under contracts entered into under this law.

Notwithstanding the provisions of the foregoing paragraph, the Government may enter into contracts for the exploration and exploitation of petroleum in non-reserved territories situated to the east of the summit of

the Eastern Cordillera, or in the territory (Comisaria) of Putumayo or in the territory (Intendencia) of Amazonas, for areas up to two hundred thousand (200,000) hectares for each concession; but no company may acquire either directly or by transfers an area greater than that prescribed in this paragraph.

Transfers of two or more contracts to a single person may be approved by the Government when it is proved that the concession or concessions so transferred are not commercially workable by themselves alone, but may be workable if added to that of the assignee. In case the transfer or transfers be approved by the Government, the concessionaire must, in respect of each concession, comply with the provisions of this law, and especially with the provisions set forth in the final paragraph of Article 20, and with all the obligations of each contract.

It is an attribute of the Government to approve or refuse approval of transfers; but the Government cannot in any way authorize any transfer which would involve a violation of the prohibition contained in the preceding paragraphs, that is to say, which would result in exceeding the limitation therein prescribed; neither can the Government approve any transfer to a foreign Government. Paragraph 4 of Article 23 of Law 120 of 1919 is hereby repealed.

Every contractor may, upon previous notice to the Government, after the end of the second year of the contract, and from year to year during the whole period of exploration, surrender lots of not less than 5,000 hectares and approximately two and a half times longer than the width.

Article 18. Exploration and exploitation of each area petitioned for shall be provided for in a single contract.

The period of exploration shall be three (3) years dating from the time the contract becomes binding; and

it may be extended from year to year for three additional years if the contractor proves that said period has been insufficient, notwithstanding compliance with the requirements imposed on him by the law and the regulations, to achieve the purposes of the exploration. By exploration is meant the totality of geological and drilling work designed to ascertain whether the lands covered by the concession contain or do not contain petroleum in commercially workable quantity.

Upon termination of the exploration period, the contractor must begin commercial exploitation of the concession as provided in this law.

The exploitation period shall be thirty (30) years from the date of the final termination of the period of exploration, including extensions thereof, if any, granted pursuant to this article; exploitation may, however, commence prior to the expiration of such exploration period.

The exploitation period may be extended for a further ten (10) years, at the option of the contractor, if he agrees to pay to the Government the royalties and taxes prescribed by the laws in force at the time of expiration of the thirty (30) years; and if he agrees, furthermore, to comply with all legal provisions in force at the time of the extension.

The period of exploration for concessions granted within the zones referred to in Paragraph 2 of Article 17 shall be five years, renewable from year to year for a further three (3) years, upon compliance with the same requirements as prescribed in this Article for other zones.

It is understood that if the contractor shall lose his rights to exploration because of failure to perform his obligations, his rights to exploitation will thereby become extinguished.

Article 19. The contractor shall pay annually in advance, during the period of exploration, a surface rental of ten centavos (\$ 0.10) for each hectare of national lands under contract during the first two years; twenty centavos (\$ 0.20) per hectare during the third year; thirty centavos (\$ 0.30) during the fourth year; forty centavos (\$ 0.40) during the fifth year; and fifty centavos (\$ 0.50) during the sixth year. In the case of explorations of lands referred to in Paragraph 2 of Article 17, the surface rental from and after the sixth year shall be fifty centavos (\$ 0.50).

It is understood that the surface area within the boundaries of an exploration and exploitation contract may be the object of applications under the laws relating to public lands, provided that the enjoyment of easements established to promote the petroleum industry, dealt with in Article 7 of this law, is not interfered with; and that as regards farmers or settlers established prior to the contract, or prior to the drilling of wells, the contractor, if he occupies part of their improvements for the purpose of exercising such easement rights, must pay to them in advance the damages prescribed in the Mining Code now in force. The provisions of Article 3 of this law shall be applicable in case the whole of their improvements is occupied.

The Government in each case, in conformity with the needs of the petroleum industry, shall fix with the contractor the area which is not subject to occupation except under permit from the contractor; but in no case may an area of five hundred (500) metres in radius from the wells and works be occupied without the consent of the contractor.

The surface rental shall be collected and must be paid by the contractor even though during the period of exploration the Government should grant to another

person the surface of the public lands covered by the exploration and exploitation contract, and in respect of which the rental referred to in this article arises.

Article 20. No exploitation concessionaire may limit the production of petroleum from his enterprise to a quantity less than one fourth of the maximum productive capacity of his wells, except under previous permit from the Government, which permit may not exceed one year in each case. Wells which have never been placed on production shall not be included in the calculation of the maximum production of the wells.

If the exploitation concessionaire restricts production without the consent of the Government to an amount less than said one-fourth part, the Government shall collect its royalties on the basis of one-fourth of the maximum productive capacity of the concessionaire's wells.

In case of disagreement between the Government and the concessionaire as to the determination of the maximum productive capacity of the wells, the controversy shall be determined by experts appointed as provided by Article 9 of this law.

In the regulations of the present law, the minimum annual investment to be made by [every contractor for the development of exploitation works in the respective concession shall be determined, and in each contract the number of years during which the investment is obligatory shall be stipulated.

Article 21. The contractor shall within the first three (3) years of the contract, delimit the boundaries of the area under contract by adequate landmarks, and shall submit a plan of such area to the proper Ministry in accordance with the requirements prescribed in the regulations of the Government.

Concessionaires in the zones dealt with in Paragraph 2 of Article 17 shall have five years within which to comply with the obligation set forth in the preceding paragraph.

At the end of each year, the contractor shall submit to the proper Ministry a geological map and a transverse profile of the portion explored or exploited, with an explanatory report, giving an account of the work he has carried on during such time, all of which must be in accordance with the provisions to be issued by the Government in the regulations.

Article 22. The contractor may begin exploitation work at any time during the exploration period, as provided in Article 18, giving notice thereof to the Government, which notice shall be accompanied by plans, geological maps and a descriptive report referring to the area that he desires to work.

In case the above mentioned plans, geological maps and descriptive report, as submitted, are deficient, the Government may require that they be duly perfected.

Article 23. When a petroleum structure is located in two or more tracts contracted to different concessionaires and this fact gives rise to conflicts between them, they shall, if the Government so requires, be obligated to put into effect a co-operative plan of operation, in conformity with technical practice, and subject to the regulations of the Government.

The provisions of this article are obligatory not only upon contractors working in lands belonging to the Nation, but also on operators in lands privately owned.

Explorers or operators of petroleum belonging to the Nation or privately owned may not drill within one hundred (100) meters of the boundaries of the respective tract.

Article 24. The contract may be terminated at any time during the term of exploration if the contractor furnishes proof that petroleum in commercial quantity has not been found.

The contractor may surrender his concession in whole or in part at any time during the exploitation period, provided he has complied with all the obligations of the contract up to the date of surrender; and the Government shall then have full liberty to enter into a new contract regarding the same lands with another person, under the provisions of the law.

If the contractor does not find petroleum in commercial quantity within the period of exploration and extensions thereof, he may, upon terminating the contract, freely remove the machinery and other materials used in the exploration.

In the foregoing cases, and whatsoever be the time when the contractor terminates the contract, the security he has furnished shall be returned to him.

When the contract is terminated for such cause, prior to the expiration of the first twenty years of the exploitation period, the contractor may also withdraw his machinery and other material, but the Nation shall have, in regard thereto, the right of purchase provided for in Paragraph two of Article 25.

The surface rental provided for in Article 19 shall be reduced prorata to the area surrendered, pursuant to the final Paragraph of Article 17.

Article 25. Upon termination of the contract for any cause, except as provided in the foregoing article, the contractor shall leave the wells which at such time may be productive in a perfect state of production, and buildings and other immovable property situated within the territory under contract in good condition, and all of such property shall become, free of charge, the property

of the Nation together with the easements and property expropriated for the benefit of the enterprise.

The purchase price of personal property shall be fixed by experts and the contractor shall be under the obligation of selling the same to the Government, if the Government so demands, within ninety (90) days after the termination of the contract.

In case of disagreement, experts shall determine whether such property is real or personal, taking into consideration the nature and use thereof, according to the provisions of the Civil Code. The experts shall be appointed and shall act as provided in Article 9.

It is understood that in case of extension of the contract, the reversion in favour of the Nation of betterments shall not take effect except upon the expiration of such extension.

The Nation may at any time take such conservatory measures as may be advantageous to it, to prevent the oil fields or works and the appurtenances thereof from being damaged or rendered useless through fault of the contractor.

CHAPTER IV

Oppositions.

Article 26. Upon the admission or selection of a proposal in conformity with Article 16, a summary thereof shall be published in the *Official Gazette (Diario Oficial)*, with a statement of the municipality, boundaries and other data which the Government deems advisable, so that possibly interested parties can identify the land where exploration and exploitation are to be carried out. The proposal shall also be advertised in the municipality or municipalities where the land is situated, by a poster affixed in the office of the mayor (alcaldia) for a term of thirty (30) days, during which time it shall be made

publicly known by proclamation of the town crier on three market days (días de concurso).

Up to the expiration of sixty days from the date of compliance with the aforesaid formalities, any person may oppose the proposed contract, presenting his opposition in writing in the appropriate Ministry or in the office of the Governor of the Department or territory (Intendencia o Comisaria), wherein the land is situated, together with the evidence on which he bases such opposition.

Upon the expiration of the term fixed in the foregoing paragraph, if the aforesaid opposition and evidence have not been presented, the proceedings in relation to the proposal shall go forward.

If within the term fixed in Paragraph 2 of this Article opposition is presented concerning the ownership of the petroleum, and such opposition is accompanied by evidence as provided in said paragraph, the proceedings relating to the proposal shall be suspended and the proposal, together with the accompanying documents, as well as the statement of opposition and the supporting evidence, shall be sent (all subject to return to the Ministry) to the Part for General Business of the Supreme Court of Justice in order that the same, in a brief and summary suit (Articles 1484 and following of the Judicial Code and 10 of Law 39 of 1921), in a single instance, and giving preference to the hearing of these matters, may decide whether or not the opposition is well founded. The opponent, the Nation and the applicant for the contract shall be deemed to be the parties in said brief and summary suit.

If the decision be favourable to the applicant, the Government may enter into the contract in question and the defeated opponent shall have the right to proceed against the Nation by an ordinary suit in the courts. The

presumptive owner of the land, who may not have made opposition within the terms fixed in this article, shall also have such right. If the decision in the brief and summary suit be adverse to the Nation, the proceedings relating to the proposed contract shall be discontinued, but the Government may avail itself of rights of action in favour of the Nation under general law.

CHAPTER V

Requirements for Drilling and Examination of Titles.

Article 27. Every natural or juristic person who intends to carry out exploration by drilling in prospecting for petroleum which he deems to be privately owned, or to exploit such petroleum, must, in either of these cases, give notice to the proper Minister as to the person on whose behalf the exploration or exploitations are to be made, the area and boundaries of the tract in which they are to be carried out, and the date on which work is to be started.

He must annex to the notice evidence proving the right to extract the petroleum found or which may be found in the tract in question. This evidence shall be sent to the Attorney-General (Procurador General) of the Nation for his opinion as to the legal worth thereof, such opinion to be given within thirty (30) days. Thereupon, the Ministry, if it shall appear to be advisable, shall take such steps as it may deem necessary to inform itself fully in regard to the matter, shall make a copy of the evidence presented and shall return the originals to the interested party, with a declaration that said party has complied with the requirements of notice.

If such declaration that the requirements of notice has been complied with, is not made by the Ministry within sixty (60) days after receipt of said notice, it is

presumed that the interested party has duly complied with his obligation to give notice and to submit evidence, and he may engage in the contemplated exploration or exploitation without prejudice to the right of the Nation to institute such actions as it may deem appropriate.

If the interested party engages in exploration by drilling or in exploitation without giving the notice required by this Article, he shall be subject to a fine of one thousand pesos (\$ 1,000) to five thousand pesos (\$ 5,000) which fine shall be imposed by the appropriate Ministry for each thirty (30) days delay.

Article 28. If the Ministry, in view of the documents submitted pursuant to the preceding Article, or by reason of other information which it obtains, believes that the petroleum in question belongs to the Nation, it shall remit the entire documentation to the Part for General Business of the Supreme Court of Justice, so that the same, in a brief and summary suit, in a single instance, and giving preference to the hearing of these matters, may decide whether or not the claim of the interested individual is well founded or not. The Nation and said interested individual shall be deemed the parties in said brief and summary suit. If the decision be favourable to the Nation the interested individual may not engage in the contemplated exploration or exploitation, nor proceed therewith, if already started, but there shall be available to him the rights of action under general law which may be appropriate. If the decision in the summary suit herein referred to be adverse to the Nation and the Government should persist in its belief that the petroleum in question belongs to the Nation, it shall proceed to give authorization and instructions to the proper legal representative of the Executive Power or to constitute an attorney to initiate the actions which may be proper.

The legal representative of the Executive Power or the attorney shall institute the suit, if suit be proper,

without delay; they shall at the same time, especially, and without prejudice to the other actions which may be proper, resort to the accessory actions of a plaintiff established by Articles 959 of the Civil Code and 407, and following, of the Judicial Code, all of which shall be admissible in these cases upon and after the filing of the complaint.

The Judge in the case shall see that the decision made in the case is complied with, and the Nation is not obligated to furnish the security which is required of a private plaintiff.

If the defendant elect to give the security provided for in Article 414 of the Judicial Code, the tribunal shall pass upon such security after hearing the Ministry and shall require it to be furnished by way of pledge in bonds of the national debt or in cash, at the rate of one peso (\$ 1.00) for each hectare of land claimed as private property, but in no case shall the deposit be less than twenty-five thousand pesos (\$ 25,000).

If in the suit which the Nation institutes under this article, final judgement is rendered in its favour, the operator or his successor must pay to the Nation, for all the petroleum which may have been produced prior to and subsequent to the complaint, the difference between the tax paid to the Nation for such petroleum considered as private property, and the royalty payable in respect of such petroleum now declared to belong to the national domain. In this case of a decision favourable to the Nation, the Government, if it deems it advisable, and if, in addition, it is of the opinion that the defendant has acted in good faith, may enter into a contract with him to continue the exploitation upon the terms and conditions of the law in force at the date of the judgement.

The authorities shall give preference to the despatch of the matters dealt with in this article, and the orders

of substantiation, interlocutory orders and final judgements shall be rendered and the procedural steps taken precisely within the terms prescribed by law. The agents of the Department of Justice shall avail themselves, with the greatest zeal, of all legal means so that the provisions of this Article shall be strictly complied with.

Article 29. There must be issued, at the expense of the interested parties a copy of every public instrument relating to rights or obligations concerning oil lands or concerning any matter connected with the petroleum industry; such copy, recorded, shall be sent to the appropriate Ministry. The notaries and registrars shall not issue nor record the first copy unless at the same time the issuance and recording of the copy for the Ministry be ordered.

In the case of private instruments relating to rights or obligations connected with the petroleum industry which the interested parties desire to, or should record, the registrar shall not record them unless at the same time there is submitted to him for recording a copy for the appropriate Ministry.

The copies referred to in this article shall be delivered by the interested parties to the Ministry within sixty (60) days after recording. Notaries and registrars shall give immediate notice to the Ministry that the instrument in question has been executed and recorded. The violation of any of the obligations, imposed hereby on interested parties and on notaries and registrars, shall give cause for a fine of from one hundred pesos (\$ 100.00) to one thousand pesos (\$ 1,000.00) for each thirty days of delay in performance, which fine shall be imposed by the Ministry in favour of the National Treasury.

Article 30. It is well understood that in contracts entered into by the Government for exploration and exploitation, the Nation is not obligate to performance

(prestación) nor to liability for any damages to the contractor in case a third party proves, by law, that he is entitled to the petroleum which is the subject matter of the contract.

CHAPTER VI

Royalties.

Article 31. Every concessionaire of exploration and exploitation of petroleum belonging to the Nation shall pay to the Government, at the port of shipment of his products, either in kind or in cash, at the election of the Government, the participation belonging to the Nation in accordance with the following scale:

From 0 to 100 kilometers, 11 per 100 of the gross product exploited.

From 100 to 200 kilometers, 10 per 100 of the gross product exploited.

From 200 to 300 kilometers, 9 per 100 of the gross product exploited.

From 300 to 400 kilometers, 8 per 100 of the gross product exploited.

From 400 to 500 kilometers, 7 per 100 of the gross product exploited.

From 500 to 600 kilometers, 6 per 100 of the gross product exploited.

From 600 to 700 kilometers, 5 per 100 of the gross product exploited.

From 700 to 800 kilometers, 4 per 100 of the gross product exploited.

From 800 to 900 kilometers, 3 per 100 of the gross product exploited.

More than 900 kilometers, 2 per 100 of the gross product exploited.

The distances prescribed in the preceding table shall be calculated along the respective pipeline between the

center of the gathering system of the enterprise and the port of shipment for the products of the concessionaire.

The Government may likewise demand its participation at the center of the gathering system of petroleum of the respective concession in kind. In such case, the concessionaire shall deliver to the Government the percentage belonging to it pursuant to the foregoing table, plus a quantity of crude petroleum equivalent to the value of the transportation of such participation, from the center of the gathering system of the producing field to the port of shipment for the products of the concessionaire, according to the rate schedules of the pipeline then in force; the additional amount of crude petroleum to be delivered to the Government on account of transportation shall be determined by dividing the value of such transportation by the price of one barrel of crude petroleum at the respective field, which price shall be fixed in conformity with the provision contained in Article 34.

When the royalties are demanded in crude petroleum, payment shall be made at the expiration of quarterly periods.

If there is no export and no pipeline payment shall be collected by taking as a basis the nearest port to which it shall be deemed practically feasible to construct a pipeline. The rate schedules of the nearest pipeline shall be applied to this imaginary pipeline. In case of failure of agreement between the Government and the interested party as to the selection of the port, or as to the length of the imaginary pipeline, the question shall be settled by experts as provided in Article 9.

The royalties may be collected by the Government, taking part in kind and another part in cash, at the port of shipment, or a part in kind at the centre of the gathering system of the oil field and another part in cash at

the port of shipment. If the Government desires to take part of its royalties in kind it may distribute such part as it may desire between the port of shipment and the center of the gathering system.

When petroleum is obtained from deposits covered by the waters of the territorial sea, the percentage of 11 per 100 fixed in the foregoing table shall be reduced to 8 per 100.

The Government shall give notice to the concessionaire, not less than six (6) months in advance, of the manner in which it will make use of the options contained in this Article.

For the purposes of this law port of shipment shall be understood to be the sea or river port where sea-going tank vessels arrive.

Article 32. Concessionaires of exploration and exploitation of petroleum belonging to the Nation who process natural gases and obtain therefrom the product known as natural gasoline, shall pay to the Government a one-thirtieth ($\frac{1}{30}$) part of the gross product obtained or the equivalent in cash at the actual price of each saleable gallon (typical or standard American gallon) in the market named in the contract.

Payment of the one-thirtieth ($\frac{1}{30}$) part of the gasoline or the equivalent thereof in cash, as provided in the foregoing paragraph, shall not be due if the concessionaire, in lieu of selling the natural gasoline or otherwise separately using the same, mixes it with crude petroleum.

If the concessionaire sells or uses natural gases for industrial purposes, he shall pay the Government five centavos (\$ 0.05) for each ten thousand (10,000) cubic feet of gas sold or used.

The Government shall, in each contract, agree upon and stipulate the methods to be employed by the concessionaires to avoid the waste of gas.

The Government is authorized to issue regulations as to the method of measuring natural gas in order to ascertain the settlements provided for in this article.

When the amount of wet natural gas produced on the concession, in the opinion of the Government and of the contractor, justifies the construction of a plant for the extraction of natural gasoline, the contractor shall proceed to install same and to process the gases referred to.

Article 33. The royalties referred to in this chapter shall be collected after deducting the crude petroleum and gas consumed in the operation of the respective concession and within the boundaries of same.

Article 34. When the royalties fixed in Article 31 are demanded in cash, payment therefor shall be made monthly on the basis of the average price, during the preceding month, of the respective crude petroleum at the port of shipment.

If said crude petroleum command no commercial price at the port of shipment, there shall be taken as a basis the average price during the preceding month of such petroleum or of some other equivalent crude petroleum agreed upon for the purpose during the course of the exploitation, between the Government and the contractor, in the market named in the contract.

From the average price of the petroleum there must be deducted the cost of transportation from the port of shipment to the controlling market. Said cost shall include all the necessary expenses, such as freights pursuant to customary tariffs, port fees and loading and unloading charges.

In case of failure of agreement between the Government and the contractor as to the selection of an equi-

valent petroleum for the purposes stated in the second Paragraph of this article, the question shall be settled by experts as provided in Article 9.

CHAPTER VII

Tax on privately owned petroleum.

Article 35. Every operator of privately owned petroleum shall pay to the State the tax due the latter according to the distance from the center of the gathering system for the petroleum from his operations to the port of shipment of his products, in accordance with the following scale:

From 0 to 100 kilometres, 8 per 100 of the gross product exploited.

From 100 to 200 kilometers, 7 per 100 of the gross product exploited.

From 200 to 300 kilometers, 6 per 100 of the gross product exploited.

From 300 to 400 kilometers, 5 per 100 of the gross product exploited.

From 400 to 500 kilometers, 4 per 100 of the gross product exploited.

From 500 to 600 kilometers, 3 per 100 of the gross product exploited.

From 600 to 700 kilometers, 2½ per 100 of the gross product exploited.

From 700 to 800 kilometers, 2 per 100 of the gross product exploited.

From 800 to 900 kilometers, 1½ per 100 of the gross product exploited.

More than 900 kilometers, 1 per 100 of the gross product exploited.

On natural gasoline and natural gas there shall be paid a tax of sixty per cent (60 per 100) of the royalty

fixed in Article 32 for gas and natural gasoline belonging to the Nation.

The taxes referred to in the foregoing paragraphs shall be collected and liquidated in the same manner as established in Chapter VI of this law for the collection and liquidation of the royalties of the State, except that the controlling market provided for in Articles 32 and 34 shall, in this case, be the market which by mutual agreement is named by the Government and the private oil operator. In case of failure to reach such agreement, the controlling market shall be that to which the major part of the petroleum from the respective operation has been sent during the time in which the taxes are payable. The Government shall have the same options provided for in said Chapter, and must give notice of the exercise of its options as provided in said Chapter.

If the taxes fixed in this Chapter be increased by subsequent laws, the increase shall not be applicable to privately owned petroleum exploitations already established at the time the new law goes into effect.

CHAPTER VIII

Transportation.

Article 36. Every person exploiting petroleum, whether privately owned or belonging to the Nation, has the right to construct and operate one or more pipelines for the service of his own operation and during the term thereof.

When there are exploitation concessionaires who individually do not produce petroleum in sufficient quantity to supply a pipeline to the port of shipment, which fact must be proved to the satisfaction of the Government, they may join in the construction of a pipe-

line in common which shall be used exclusively for their respective concessions.

Companies which are not producers of petroleum may likewise construct and operate pipelines under prior contract with the Government and pursuant to the provisions of this Law.

The Government may also construct pipelines and may contract for the construction and operation thereof.

Article 37. The general route of every pipeline, which shall be the shortest practicable route in accordance with technical requirements, as well as the location of the sea or river terminal thereof in the port of shipment selected by the operator, shall be submitted for approval to the Government. After obtaining this approval, the interested party may not proceed to construct such pipelines without submitting the final location, plans and detailed estimates of construction and operation and the specifications thereof to the Government for approval; the Government may only refuse its approval for technical reasons.

The Government, upon issuing regulations of this law, shall name the periods within which applications referred to in this article must be passed upon.

In case of a difference over the technical reasons on account of which the Government refuses its approval to the final location and to said plants, estimates and specifications, the matter shall be determined by experts appointed in conformity with Article 9 of this law.

Article 38. All pipelines constructed in the country pursuant to the provisions of this law by non-producing companies, shall be considered as common carrier enterprises. The Government shall have a preferential right for the carriage of all its petroleum by these pipelines. In pipelines for private use, such preference is limited to the petroleum derived from the royalties or

taxes due on the production serviced by the pipeline in question. In every case the Government must pay for carriage in accordance with the rate schedules in force at the time it is effected.

The right of preference shall be up to twenty per cent (20 per 100) of the daily carrying capacity of the respective pipeline.

Article 39. The Government, in agreement with contractors of exploration and exploitation, or with pipeline contractors, or in agreement with operators of privately owned petroleum, shall fix the rate schedules for transportation, taking into consideration:

- 1). Amortization of capital invested in construction;
- 2). Expenses of maintenance, management and operation;
- 3). An equitable profit for the operator which shall be fixed by agreement between him and the Government, on the basis of the profits earned in other countries, and especially in the United States, by similar pipeline companies, and taking into consideration also the economic development of the petroleum fields serviced by the pipeline in question.

The provisions of this Article are applicable to other systems of transportation of petroleum and its derivatives.

No pipeline constructed in the country may be opened for service without approval of the rate schedules for transportation given by the Government in conformity with this Article.

In case no agreement is reached as to fixing the rate schedules, the matter shall be settled by experts appointed in conformity with Article 9 of this law.

Article 40. The period of duration of every pipeline contract shall be up to thirty years, dating from the time it is put into service, at the expiration whereof it shall

become, free of charge, the property of the Nation, together with all zones, buildings and other immovable property affixed to the surface as an integral part of the enterprise. The contractor shall be obligated to deliver said pipelines and property in good condition for service. As to personal property, the Government shall have the same rights as established in Article 25 of this law. The provisions of said Article shall also be applicable in regard to taking conservatory measures, to the determination as to whether the property is real or personal, and to the fixing of the price.

Pipelines constructed by contractors for exploration and exploitation shall also become, free of charge, the property of the Nation upon the termination, for any cause, of the respective contract for exploration and exploitation, except as provided in Article 21 of this law.

It is understood that pipelines used for the service of privately owned petroleum operations and which are not for public use are not included within the provisions of this Article.

Article 41. The Government, in agreement with the operators of pipelines of every kind, shall revise the rate schedules for transportation upon the termination of four year periods, in order to fix the rates which are to govern in the next following period, and taking into consideration:

- 1). The profits agreed upon for each operator in accordance with Article 39;
- 2). Expenses of maintenance, management and operation duly proved, and
- 3). The capital investment not yet amortized at the date of each revision.

In case an agreement is not reached as to the revision of the rate schedules, the matter shall be settled by experts appointed in conformity with Article 9 of this law.

Article 42. There is hereby created a tax on transportation by pipelines for public use, equal to two and a half per cent ($2\frac{1}{2}$ per 100) of the amount resulting from multiplying the number of barrels transported by the rate in force for each pipeline.

This tax shall be collected quarterly as accrued.

CHAPTER IX

Refineries.

Article 43. Refining of crude petroleum is freely permitted within national territory.

The Government may grant permits for a term not to exceed thirty (30) years for the establishment of refineries or fuel supply stations in lands or places declared as a national reserve by law or decree. The compensation and other terms of the permit shall be determined in the respective contracts entered into therefor.

The Government may establish and operate refineries or contract for the construction or operation thereof, in order to process the crude petroleum belonging to it by reason of royalties or taxes, or which it may acquire in any manner whatsoever. It should make use of this authorization as soon as the facts show the advisability of stabilizing the price of refined products to promote the economic welfare of the country and in the public interest.

Article 44. The Government is hereby authorized to erect one or more factories for containers for the products derived from crude petroleum at such place or places as the economic conditions of the country make advisable.

The Government shall sell its containers at cost.

Article 45. The petroleum received by the Nation as royalties or taxes may be sold by the Government without

subjection to the proceedings prescribed in the fiscal laws, upon the sole condition that the selling price be no lower than that offered by the operator who pays the royalty or tax. The opinion of the Advisory Board shall be heard before sale is made.

No sale made pursuant to this authorization may comprise more petroleum than may be obtained by the State in three (3) years. Contracts for sales for a term of more than three (3) years shall be subject to the approval of Congress.

CHAPTER X

Penalties, Lapse of Contracts and Permits.

Article 46. In the regulations of the present law, the Government may impose, by administrative action, fines up to five thousand pesos (\$ 5,000.00) in each case as a penalty for the non-performance of the obligations prescribed in this law or in the respective decrees, when the non-performance is not cause for the lapse of the contracts or cancellation of permits or when the Government prefers to elect such penalty in lieu of declaring lapse in the pertinent cases of Article 47.

Article 47. The Government, after hearing the Advisory Board, may declare the lapse of any contract it enters into or cancel any permit it grants relating to the petroleum industry, in each of the following cases:

1). When the royalties or taxes due it are not duly paid to the Nation, or when the preferential right of the Government for the transportation of its petroleum is ignored;

2). When the exploitation or transportation is not commenced within the term fixed therefor in the contracts, or if such operations, having once been commenced, are suspended for more than one hundred and

twenty (120) days in one year without the consent of the Government;

3). When, in the case of an oil structure belonging to different contractors and of a conflict arising between them for that reason, they refuse to put into effect a co-operative plan of operation, as provided in Article 23 of this law;

4). When, in the case of Article 9, the contractor refuses to submit the controversy to the decision of experts or refuses to comply with their decision;

5). When a firm or branch is not permanently constituted and domiciled in Bogotá, as provided in Article 8;

6). In the case of insolvency or bankruptcy of the contractor, judicially declared by the Courts;

7). When the contractor transfers a contract to a foreign Government, and

8). When the contractor fails to make the annual investment provided for in the final paragraph of Article 20.

The declaration of lapse, by administrative action, or the cancellation of a permit shall not be made except upon previous notification to the interested party of the grounds alleged therefor, which notification shall be made in a manner to be prescribed in each contract.

The interested party shall have a term of ninety (90) days from the time the respective notice is given within which to rectify or remedy the failure of performance with which he is charged, or to formulate his defense.

CHAPTER XI

Final provisions.

Article 48. The Government shall cause an examination to be made of the petroleum reserves referred to in this law, and for such purpose it is hereby fully au-

thorized to contract for the personnel and incur all the expenses required by such examinations.

The Government shall make provision for the instruction and organization abroad and within the country of colombian personnel, both technical and practical, for all branches of the petroleum industry.

Article 49. In order to be valid, contracts or permits referred to in this law shall require the approval of the President of the Republic, after hearing the report of the Advisory Petroleum Board, and after a favourable opinion of the Council of Ministers, and the declaration by the Council of State that they are in accordance with the provisions of law. After compliance with these requirements, the contracts shall be drawn up as public instruments (By a Notary).

Article 50. In the administrative proceedings referred to in this law, the rules of judicial procedure compatible with the nature of administrative proceedings shall be observed, for the purpose of supplying any lacunae that may arise.

Article 51. There is hereby created a Board to be known as the Advisory Petroleum Board, composed of five members appointed as follows: two (2) by the Executive Power, one (1) by the Full Part of the Supreme Court of Justice, and one (1) by each of the Houses of the Legislature. The proper Minister shall call meetings of the Board, shall act as chairman thereof, shall be entitled to speak at its meetings, and shall have the right to consult it in regard to any matter connected with the petroleum industry.

The members of the Advisory Petroleum Board shall be appointed for terms of three (3) years, and are eligible for reelection. Each of the members of the Board shall receive fifteen pesos (\$ 15-00) for each meeting which he attends.

The members of the Advisory Petroleum Board shall not engage in business connected with petroleum.

Article 52. The Government may enter into special contracts, subject for their validity to the approval of the Congress, concerning petroleum belonging to the Nation in the Department of North Santander, in the territories of Arauca, Vichada, and Vaupés, and in those specified in Paragraphs *a*) and *b*) of Article 4 of Law 72 of 1925.

Article 53. The petroleum belonging to the Nation may only be exploited by virtue of contracts which are initiated and become binding in conformity with the present law.

Article 54. No natural or juristic person may make aerial photogrammetrical surveys without permit from the Government, to whom a copy of the work performed must be delivered.

Article 55. Provisions of law prior to the present law, which regulates the subject matter as a whole, are hereby repealed. There shall continue in force, in addition to the paragraphs cited in Article 52, Article 41 of Law 120 of 1919, Article 17 of Law 14 of 1923, Law 4 of 1921, Law 13 of 1922, and all such provisions as have especially made a declaration of dominion or reservation of dominion of the Nation regarding petroleum, in such part thereof as refers to said declaration.

Article 56. Article 2 of Law 29 of 1921, as modified by Article 9 of Law 110 of 1922, likewise remains in force.

Given at Bogotá on the second of March, nineteen hundred and thirty-one.

The President of the Senate,

CARLOS JARAMILLO ISAZA

The President of the House of Representatives,

EDUARDO LEMA V.

The Secretary of the Senate,

Antonio Orduz Espinosa

The Secretary of the House of Representatives,

Fernando Restrepo Briceno

The Executive Power—Bogotá, 4th March 1931.

Publish and execute.

ENRIQUE OLAYA HERRERA

The Minister of Industries,

FRANCISCO JOSÉ CHAUX

NOTE—This English translation is merely of any explanatory nature. The Spanish text of the law is to be considered as legal.

10

11

12

13

